

LEY 9/1990, de 8 de noviembre, REGULADORA DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TÍTULO PRELIMINAR. PRINCIPIOS GENERALES (Arts. 1-20)

TÍTULO I. DEL RÉGIMEN DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Capítulo I. Los bienes y derechos de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. (Arts. 21-37)

Capítulo II. Las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. (Arts. 38-43)

TÍTULO II. DE LOS PRESUPUESTOS

Capítulo I. Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Sección 1ª. Contenido y aprobación. (Arts. 44-53)

Sección 2ª. Régimen de los créditos y sus modificaciones de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos (Arts.54-67)

Sección 3ª. Ejecución y liquidación de los Presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos (Arts. 68-78)

Capítulo II. Presupuestos de las Empresas y Entes Públicos. (Arts. 79-81)

TÍTULO III. DE LA INTERVENCIÓN

Capítulo I. La Intervención de la Administración de la Comunidad. (Arts 82-88)

Capítulo II. La Intervención de los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid. (Art. 89)

TÍTULO IV. DEL ENDEUDAMIENTO Y LOS AVALES

Capítulo I. Del endeudamiento. (Arts. 90-96)

Capítulo II. De los avales de la Comunidad de Madrid. (Arts. 97-103)

TÍTULO V. DE LA TESORERÍA (Arts.104-112)

TÍTULO VI. DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

Capítulo I. Disposiciones Generales. (Arts. 113-122)

Capítulo II. De la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. (Arts. 123-128)

TÍTULO VII. DE LAS RESPONSABILIDADES (Arts.129-134)

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

LEY 9/1990, de 8 de noviembre, REGULADORA DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ⁽¹⁾

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, establece la aplicación de las leyes y disposiciones del Estado en materias no reguladas por la Asamblea de Madrid, circunstancia que junto con las reiteradas y expresas remisiones de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, ha determinado la aplicación directa e indiscriminada al ámbito de nuestra Administración de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Por otra parte, es ésta una materia sobre la que la doctrina y la jurisprudencia han abrigado dudas y planteamientos dispares acerca de la naturaleza de básicos de ciertos preceptos de la citada norma y, por ende, del ámbito de actuación reservado a las Comunidades Autónomas, cuestión que puede considerarse clarificada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1986, de 31 de enero, a cuyos principios interpretativos se acomoda la presente Ley.

Resulta necesaria, por tanto, la regulación expresa del régimen de la Hacienda de la Comunidad de Madrid coordinándose con la legislación del Estado en las materias reservadas a la normación básica, y desarrollando armónicamente aquellos otros aspectos propios de la Administración Autónoma, en la forma que más convenga a sus intereses peculiares, respetando en todo caso el marco normativo institucional superior establecido por la Constitución y las Leyes Orgánicas de desarrollo, principalmente la 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

La organización del Estado de las Autonomías que consagra la Constitución Española de 1978 ha supuesto un giro radical, al configurarse las Comunidades Autónomas con unas peculiaridades que en el transcurso del tiempo la experiencia va poniendo de manifiesto en un doble sentido: con respecto al Estado y, además, entre cada una de ellas, aunque en muchos casos no sean sustanciales.

En este escenario, en los últimos años se viene produciendo una acelerada evolución de la doctrina de la Hacienda, a la que contribuye el fenómeno apuntado anteriormente y en la que las aportaciones de las Comunidades Autónomas adquieren un peso relevante. La jurisprudencia tampoco es ajena al cambio.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, se viene configurando un Sector Público bajo una concepción integradora y uniforme, cohesionado en su actividad económico-financiera, a pesar de la diversidad de sus agentes y sus peculiaridades estructurales y jurídicas. A partir de este fenómeno, sin duda intencionado en aras de una racionalización de la Administración autónoma, puede comprenderse una filosofía que trata de plasmar la presente Ley: los agentes del Sector Público no son compartimentos estancos, ni ajenos a una Administración de los Servicios Centrales, con independencia de las finalidades y objetivos concretos que persiga cada uno de ellos.

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, y en particular los recursos de la Comunidad de Madrid requieren unos instrumentos de gestión y soportes legales adaptados a sus necesidades. El problema no es cuantitativo, sino cualitativo. La diversidad de figuras y la interdependencia existente en la gestión de los recursos,

⁽¹⁾ B.O.C.M. 21-XI, c.e. 13-XII-1990.

entre distintas Administraciones financieras, hace necesario contemplar herramientas presupuestarias, de gestión y contables, ágiles y eficaces.

La instrumentación del Endeudamiento y de la Tesorería es claramente distinta a la que utiliza la Administración del Estado: la apelación al Banco de España o la política monetaria, son dos claros ejemplos, que en definitiva ilustran lo que en el fondo responde a dos concepciones diferentes: Tesoro Público-Tesorería, Deuda Pública-Endeudamiento.

Sería prolijo explicar al detalle cada matiz que, en definitiva, podemos encontrar al profundizar en la materia. La experiencia diaria en la gestión de la actividad económico-financiera es el fiel reflejo de esta afirmación.

La Ley General Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid pretende, por otra parte, dar un contenido amplio con dos finalidades: mantener su vocación de permanencia, y servir de referencia única a la gestión económico-financiera, en la medida de sus posibilidades.

La terminología tradicional de la Administración financiera y la complejidad de sus procedimientos ha propiciado a lo largo de la historia una ignorancia y rechazo a la formación de una cultura hacendística, tarea sólo para especialistas, que, en parte, puede considerarse la causante de la dificultad en la gestión. De ahí, que se haya buscado una metodología, que no descuide este aspecto, en especial lo referente a normalización de términos y definiciones.

La Ley está compuesta por un Título Preliminar de carácter general, y siete más con el siguiente contenido:

Título I. Del Régimen de la Hacienda de la Comunidad.

Título II. De los Presupuestos.

Título III. De la Intervención.

Título IV. Del Endeudamiento y los Avaluos.

Título V. De la Tesorería.

Título VI. De la Contabilidad Pública

Título VII. De las Responsabilidades.

El Título Preliminar define el contenido y ámbito de aplicación de la Hacienda, en el marco de la Ley. Frente al tradicional concepto jurídico, se da un paso hacia el concepto económico al incluir los bienes, sin perjuicio de una remisión a la legislación correspondiente en cuanto a su régimen se refiere. La extensión al Sector Público de la Comunidad, es una característica derivada de la filosofía apuntada anteriormente.

Para la Asamblea de Madrid contempla la Ley la aplicación del régimen económico-financiero general con carácter supletorio al particular que, de acuerdo con la normativa específica y sus peculiaridades, le corresponda.

La normalización de conceptos como Administración de la Comunidad, Organismos Autónomos administrativos, Organismos Autónomos mercantiles, Empresas Públicas y Entes Públicos, son fundamentales para determinar el alcance que luego, en cada caso concreto, tendrá la aplicación de la Ley.

Explícitamente se consagran, como no podía ser menos, los tradicionales principios de legalidad, unidad de Caja, presupuesto anual, único y universal, contabilidad, control y responsabilidad así como la distribución de competencias, materias reservadas a la Ley y prerrogativas de la Hacienda de la Comunidad, así como los preceptivos controles parlamentarios del gasto.

I.

El Título Primero establece el régimen jurídico al que debe someterse la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en su doble vertiente de acreedora y deudora.

Habiéndose incluido en el artículo dos de la Ley a los bienes como factor integrante del citado concepto, es necesaria la remisión que por el Capítulo I se hace a la Ley de Patrimonio de la Comunidad, integrando mediante esta técnica jurídica la regulación de dicha materia.

En cuanto a los derechos de la Hacienda de la Comunidad, se enumeran en primer lugar los mismos de conformidad con el artículo cincuenta y tres del Estatuto de Autonomía, recogiendo a continuación el principio de su no afectación, salvo por ley, así como las prohibiciones que históricamente han sido acuñadas en el tratamiento de los derechos económicos de la Hacienda Pública.

Tras señalar las prerrogativas de la Hacienda de la Comunidad y regular la prelación de créditos y la vía de apremio, continúa el Capítulo atendiendo a las recientes reformas habidas en cuanto al devengo y cómputo de los intereses de demora y representación en juicio, para terminar regulando el instituto de la prescripción. En este punto es de señalar la recepción del principio de eficiencia en la recaudación de los derechos económicos de la Comunidad.

Asimismo cabe resaltar la innovación que supone la repercusión sobre las disposiciones de este Título del concepto amplio dado por la Ley al título "Hacienda de la Comunidad", lo que implica la extensión de varios de sus preceptos a las Empresas y Entes Públicos de la Comunidad, en la línea integradora seguida por todo el Sector Público comunitario.

En cuanto al Capítulo II, la Ley determina las fuentes de las que nacen las obligaciones económicas de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y su exigibilidad, haciendo especial hincapié en la de las obligaciones nacidas de sentencia judicial firme, para las que se establecen mecanismos extraordinarios, en cumplimiento de la teoría constitucional de la separación de poderes.

Se contempla también en la Ley el supuesto de contratos sometidos al Derecho privado, cuya aceptación y elaboración doctrinal ha pugnado contra la obsolescencia de la Ley General Presupuestaria en este campo, cuya regulación se suplía por vía de interpretación de la laguna legal existente.

En justa correspondencia con el tratamiento dado a los recursos económicos, se recoge en la Ley el derecho de los acreedores de la Comunidad al devengo de intereses a su favor, terminando el Capítulo con la regulación de la prescripción de las obligaciones económicas a cargo de la Hacienda de la Comunidad.

II.

El Título II, de los Presupuestos, parte de una concepción globalizadora de los Presupuestos Generales de la Comunidad, como integrantes de la totalidad de los ingresos y gastos de su Sector Público. Es en definitiva la plasmación y desarrollo del principio de Universalidad y del principio de Unidad, al concebirlo como documento único, máxima expresión de la actividad económico-financiera del Sector Público de la Comunidad, todo ello, sin perjuicio de las particularidades de las Empresas Públicas y demás Entes Públicos, a los que dedica el Capítulo II.

Comienza el Título definiendo el contenido y ámbito de aplicación del Presupuesto. El principio de temporalidad tiene su reflejo en el concepto de ejercicio presupuestario, que se define acotándolo al año natural.

Para las Empresas Públicas y Entes Públicos que tengan un ciclo productivo distinto, es válido el periodo definido, al permitir realizar los ajustes necesarios para presentar magnitudes homogéneas.

El equilibrio presupuestario inicial es otra característica que recoge la Ley, para todos y cada uno de los Presupuestos que integran los Generales de la Comunidad.

Las normas y criterios de elaboración, no quedan determinados en sus detalles concretos, por considerarlo propio de normativa de inferior rango, que permitirá adaptarlos a cada ejercicio en función de los objetivos, medios y demás parámetros y, en definitiva, del escenario presupuestario previamente diseñado.

El mecanismo de la prórroga presupuestaria permite la realización de la actividad económico-financiera con solución de continuidad, en el caso de que comience un ejercicio presupuestario y no estén aprobados los Presupuestos correspondientes. Para facilitar la conversión contable de los ingresos y gastos ejecutados durante el periodo de prórroga a los nuevos Presupuestos, se faculta al Consejero de Hacienda a realizar las operaciones pertinentes. Estas vendrán definidas en función de los cambios estructurales, de cuantías de previsiones y créditos, y de criterios contables, que se produzcan entre el Presupuesto prorrogado y el nuevo que se apruebe. No hay que olvidar que los efectos económicos de las previsiones y créditos serán desde el día primero del ejercicio presupuestario. Todas estas actuaciones deben estar sometidas a los correspondientes controles parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Se cierra la Sección Primera de este Capítulo con la plasmación del principio de Presupuesto Bruto, al regular que los derechos y obligaciones reconocidas deberán aplicarse al Presupuesto por su importe íntegro.

La Sección Segunda está dedicada al régimen de los créditos y sus modificaciones, en el ámbito de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos.

Queda fielmente plasmado el principio de especialidad, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa. La primera limitando el destino de los gastos a la finalidad para la que hayan sido autorizados. La segunda, limitándolos en su cuantía, al no poder gastar por importe superior al consignado. En este caso, se sanciona con todo rigor, mediante la nulidad de pleno derecho, todo acto o disposición general con rango inferior a Ley que infrinja lo preceptuado.

El Presupuesto se estructura mediante diversas clasificaciones. El estado de ingresos y el estado de gastos distinguirá los recursos previstos y los créditos para gastos autorizados.

Los recursos se agrupan en masas homogéneas de la misma naturaleza económica: corrientes y de capital. La desagregación de cada una de ellas quedará recogida a través de capítulos, artículos, conceptos, etc., en función del grado de desarrollo que adquieran. Esta es, en definitiva la descripción de la clasificación económica.

Los créditos para gastos tendrán una clasificación orgánica, económica, por programas y funcional. La Ley queda abierta a otras posibles clasificaciones como la territorial, que no contempla expresamente pero tampoco excluye.

Tradicionalmente ha sido la clasificación económica el eje donde ha recaído el mayor peso específico de la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del Presupuesto. La evolución del presupuesto de medios hacia el de objetivos ha dado paso a la clasificación por Programas, que adquiere así el protagonismo que le corresponde. La ley la describe en primer lugar en un intento de plasmar esta concepción, relegando a un segundo plano la económica. En la Comunidad de Madrid esta técnica se viene empleando desde su nacimiento, y sus raíces se extienden a la anterior Diputación Provincial.

El principio de especialidad antes descrito, tiene su aplicación en los créditos para gastos. Nace así el concepto de vinculación jurídica plasmado en la Ley como su máxima expresión. Con carácter general, son vinculantes los créditos clasificados por Programas, orgánica y económicamente.

Dado que cada una de estas clasificaciones se traduce en una expresión contable con diversas posibilidades de grado de desarrollo, la vinculación determinará hasta qué nivel de desagregación se considera aplicable el principio de especialidad. Esta determinación debe hacerse anualmente a través de cada Ley de Presupuestos, en función de las peculiaridades propias del ejercicio presupuestario, y dado su carácter variable, no hay razón para determinarla en una Ley General como la presente, que tiene vocación de permanencia.

Razones similares a la expuesta avalan que otros tantos parámetros se dejen a la Ley anual de Presupuestos para su concreción. Es el caso de los compromisos de gasto plurianuales, o de otros límites no contemplados en las modificaciones presupuestarias.

La excepción al principio de especialidad recae en los créditos denominados ampliables. Por ello, deberá determinarse de una manera taxativa, en cada ejercicio presupuestario, cuáles tienen esta naturaleza.

La adaptación de los créditos iniciales autorizados, de carácter limitativo, a las variaciones de la realidad administrativa en el transcurso de la ejecución presupuestaria, se instrumentan a través de las modificaciones presupuestarias. Estas se configuran con la tipificación tradicional si bien las peculiaridades propias de la Comunidad son recogidas en cuanto a competencia y requisitos de aprobación se refiere. La configuración finalista de muchos recursos, y su interdependencia respecto a otras Administraciones encuentran su plasmación en la figura de las generaciones de crédito. Como singularidad a destacar, se regulan los Créditos Provisionales, como sustitutos de los Anticipos de Tesorería, de confusa terminología y donde se ha optado por la que la propia Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, inicialmente, y en su Exposición de Motivos así consta, se concebían. No obstante, se amplían los supuestos, acordes con aquellas situaciones de imperativo cumplimiento para la Hacienda, cuando los mecanismos generales no son lo suficientemente ágiles y eficaces. En todo caso, se trata de una situación provisional, de carácter transitorio, y de ahí la elección de esta terminología.

La Ejecución y Liquidación de los Presupuestos, ocupa la Sección Tercera del Capítulo I. Como metodología utilizada se distingue el proceso del gasto del proceso del pago, concibiendo la ejecución de los créditos para gastos dentro del primero, y definiendo a su vez, las diferentes fases en que se materializa. Análogamente ocurre con la ejecución del Presupuesto de Ingresos.

La ejecución de Ingresos y Gastos, así pues, termina desde un punto de vista presupuestario, con el nacimiento de los derechos y obligaciones reconocidas, es decir con el nacimiento de los deudores y acreedores por derechos y obligaciones reconocidas, respectivamente, de la Hacienda de la Comunidad.

La propuesta de pago es el enlace entre dos procesos diferenciados: gasto y pago. Este último se configura en el Título de la Tesorería.

Entre las fases de ejecución del Presupuesto de Ingresos, destaca la figura del compromiso de ingreso, como hecho que la realidad refleja cada día, quedando esta figura plasmada en el texto legal, por las repercusiones contables y financieras que tiene.

Como final de la ejecución presupuestaria, se definen los mecanismos de cierre y liquidación, canalizando los diversos remanentes existentes al cierre del ejercicio, y determinando el destino de los deudores y acreedores pendientes de cobro y pago respectivamente, así como todo aquello no afectado a estas situaciones. Finalmente quedará la determinación del resultado del ejercicio, y de los remanentes, que tienen la consideración de recursos propios.

El Capítulo II está dedicado exclusivamente a las Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comunidad, en concordancia con la parte del Capítulo I que se dedica a la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos. Las características de estos agentes, así como su finalidad y objetivos, aunque integrados en la Comunidad de Madrid, requieren unas técnicas diferenciadas. En definitiva, se recoge el régimen establecido en la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 y sus reformas posteriores, así como la regulación que la Comunidad ha realizado en su propia normativa, a través de la Ley Reguladora de la Administración Institucional.

III.

El Título Tercero, referido a la Intervención, recoge el instituto jurídico de la fiscalización, en su triple vertiente de previa, formal y material, así como la comprobación de la inversión. Esta función se ejercerá con el alcance y contenido tradicionales, mediante prescripciones o reparos escritos, todo ello en cumplimiento de los principios de control y seguridad.

No obstante, y sin detrimento de ambos principios, se ha atendido también a las nuevas directrices de la teoría y de la práctica legislativas encaminadas a proporcionar una mayor agilidad y eficacia al proceso del gasto. Ello se ha traducido en la recepción en esta Ley del contenido del artículo 95 de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada a tal precepto por la Ley 33/1987 de 23 de diciembre, que se refiere al alcance limitado de la fiscalización previa en determinados casos y que se completa con el control pleno a posteriori a través de técnicas de auditoría, en la línea más progresiva y reciente de la doctrina.

Si a la fiscalización previa, en la forma que ha sido configurada, añadimos la intervención formal y la material, la comprobación de la aplicación de los caudales públicos y los controles financieros y de eficacia regulados en el artículo 17 de la Ley, queda puesta de manifiesto la inclinación de la misma hacia un sistema de control moderno que apuesta por conseguir una mayor agilidad en la ejecución presupuestaria y consecución, por tanto, de los objetivos programados, sin menoscabo de la fiabilidad y seguridad en el manejo de los fondos públicos, punto cardinal del sistema democrático.

IV.

El Título IV denominado del Endeudamiento y los Avales consta de dos capítulos, uno para el endeudamiento y otro para los avales.

El capítulo del Endeudamiento agrupa las operaciones de crédito en función de su plazo, según lo establecido en el art. 14 de la L.O.F.C.A. (Ley 8/1980) y en concordancia con ésta distingue operaciones por plazo superior a un año y operaciones de plazo inferior a un año, estableciendo también que, éstas últimas tendrán por objeto financiar necesidades transitorias de Tesorería y las de plazo superior a un año financiar gastos de inversión.

Asimismo se establece que su creación habrá de ser autorizada por Ley y que la amortización y los gastos por intereses se aplicarán siempre a presupuesto.

Podrán estar representados en títulos, valores o anotaciones en cuenta, no siendo necesaria la intervención de fedatario público en todas las operaciones.

Es necesario resaltar que, conforme a lo establecido en la L.O.F.C.A., los títulos que emita la Comunidad gozarán de los mismos beneficios y condiciones que los de la Deuda del Estado, pudiendo estar denominados en pesetas o en cualquier otra moneda.

También recoge este primer Capítulo el régimen de la prescripción de dichas operaciones.

En el Capítulo segundo se trata de los avales de la Comunidad pudiendo ésta avalar obligaciones derivadas de créditos concertados en el interior o en el exterior. Se establece como límite para los avales a las operaciones de crédito que realicen los Organismos Autónomos y Empresas dependientes de la Comunidad el importe de las operaciones de crédito que figuran en las Leyes de Presupuestos.

El Consejero de Hacienda, dentro de los límites establecidos, puede convenir las cláusulas que resulten usuales en el mercado financiero. También se recoge que los avales otorgados podrán devengar las comisiones que se establezcan. Como mecanismo de control, la Consejería de Hacienda podrá inspeccionar las inversiones financiadas con créditos avalados por la Comunidad, dando cuenta de los resultados de la referida inspección a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea.

V.

El Título V, de la Tesorería, define el ámbito de aplicación, y delimita el contenido, constituyéndolo todos los recursos financieros ya sean de dinero, valores o créditos, tanto de la Administración de la Comunidad como de sus Organismos Autónomos.

El principio de caja única queda plasmado en el Título, con la filosofía de una superior autoridad, bajo cuya dependencia operan y funcionan las posibles Tesorerías que puedan existir. Esta figura la encarna la Tesorería General, a través de su titular, el Tesorero General.

Dado el alcance del concepto Tesorería de la Comunidad, que se desprende de la definición contenida en la Ley, no sólo las disponibilidades líquidas son una parte importante de su actividad, sino que los derechos reconocidos pendientes de cobro, o relación de deudores de la Hacienda, así como la relación de acreedores u obligaciones reconocidas pendientes de pago, integran también otra parte importante de dicha actividad. Todo ello sin perjuicio de los restantes títulos, valores, etc., u operaciones descritos en la Ley.

La Tesorería General es la responsable del proceso del pago, que con metodología análoga al del gasto, se incluye y describe en este Título. La función adquiere uniformidad, al hacer coincidir la figura del Ordenador General de Pagos con el Tesorero General.

En el proceso del pago se configura la Ordenación del Pago como primera fase, con unas connotaciones distintas a las tradicionales. Su objeto es adecuar el ritmo del cumplimiento de las obligaciones del Plan de Disposición de Fondos, asegurando las disponibilidades líquidas de Caja en cada momento y controlando el seguimiento de dicho Plan.

Los controles clásicos de la Ordenación del Pago, en lo referente al examen documental de los justificantes del gasto, así como de su legalidad en general, se consideran propios del proceso del gasto comprendido en el Título II de la presente Ley, y su realización propia de la función interventora en lo referente al control del proceso del gasto.

Se detallan las funciones de Tesorería y sus mecanismos de actuación, sobre la base de una actividad con peculiaridades que la distinguen del Tesoro Público.

Aunque se trata de fondos públicos en su carácter, su relación con Instituciones financieras y mercados financieros es consecuencia de la propia naturaleza de esta figura en la Comunidad. El recurso de apelación al Banco de España, o la plasmación de una política monetaria mediante los instrumentos del Tesoro Público no son

actividades de su competencia. De ahí que las competencias, funciones y fines regulados en el Título presente, vayan encaminadas a la realización de cobros y pagos y a la optimización de los recursos dentro de las reglas del mercado.

Las existencias de Caja, han de permanecer en Instituciones financieras, y éstas se rigen por las reglas del mercado, de carácter privado, con lo que esto conlleva. Establecer garantías y mecanismos de control son otras actuaciones que se regulan en el Título.

El sometimiento al régimen de contabilidad pública y el régimen de intervención son, por último, los controles que lleva a cabo la Intervención General y Delegada de la Tesorería, como órgano externo a la Tesorería de la Comunidad.

VI.

El Título VI regula el régimen de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid: todos los agentes que integran su Sector Público están sometidos a dicho régimen, así como los perceptores de transferencias con cargo a los Presupuestos Generales en cuanto a su empleo o aplicación; esto, en virtud de legislación estatal de carácter básico.

El sometimiento al régimen de contabilidad pública conlleva la obligación de rendir cuentas. El Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de la actividad económico-financiera, y la Asamblea de Madrid como la institución parlamentaria que en su día habrá autorizado el ejercicio de tal actividad mediante la correspondiente Ley anual de Presupuestos.

Tradicionalmente la contabilidad pública ha tenido como finalidad principal la rendición de cuentas, habiendo relegado a un segundo plano el proporcionar la información necesaria a la gestión, y a los órganos de gobierno para la toma de decisiones. La creciente demanda de información y la importancia que tiene una correcta planificación de la actividad económico-financiera, hacen de la contabilidad pública una herramienta indispensable para la gestión presupuestaria. Así gestión y control se convierten en las dos finalidades principales que se canalizan a través de la información que proporciona la contabilidad, y de la Cuenta General de la Comunidad.

Se regula, pues, la contabilidad pública en dos Capítulos. El primero sobre Disposiciones Generales y el segundo, dedicado a la Cuenta General de la Comunidad.

Las Disposiciones Generales describen los fines de la contabilidad pública, así como el régimen de organización relativo a la dirección y gestión. El Plan General de Contabilidad de la Comunidad y los parciales o sectoriales que se aprueben, constituyen junto a los sistemas de información las herramientas más importantes para proporcionar la información necesaria a la gestión y para la toma de decisiones.

El Capítulo II, regula la Cuenta General de la Comunidad. Esta supone el último eslabón de una cadena, que comenzará con la elaboración del Presupuesto y su aprobación, y que, una vez fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y aprobada por la Asamblea de Madrid, cerrará el ciclo presupuestario.

Se describe el contenido básico de la Cuenta General, dejando a la vía reglamentaria el desarrollo de las cuentas de los Organismos Autónomos y Empresas y Entes Públicos, debido a las peculiaridades propias de cada agente del Sector Público.

El Plazo de envío al Tribunal de Cuentas que la Ley determina es de 10 meses. Es un plazo realista, dada la complejidad de las cuentas a rendir y, a su vez, viene a coincidir con el plazo de presentación del proyecto de Ley

anual de Presupuestos para el ejercicio siguiente al que se elaboran dichas cuentas: dado que parte de la documentación anexa al mencionado proyecto también debe formar parte de la Cuenta General, es razonable su coincidencia en el tiempo. Por otro lado, con plazos más cortos la experiencia de todas las Administraciones viene demostrando que se entra en una dinámica de incumplimiento sistemático.

VII.

Por último, el Título séptimo establece las responsabilidades de las Autoridades y personal al servicio de la Comunidad de Madrid por infracciones a las disposiciones de la presente Ley.

En efecto, de poco servirían los mandatos, prohibiciones y cautelas de la Ley si la misma careciese de herramientas suficientes de compulsión dirigidas a quienes tienen que aplicar sus preceptos.

En este sentido, y como quiera que la Ley General Presupuestaria despliega un sistema de responsabilidades perfectamente aceptable y completo, se ha optado por su recepción íntegra, cuya aplicación en la práctica se verá completada por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y normas de desarrollo.

Únicamente cabe resaltar la sustitución del término "funcionarios" por la de "personal", a fin de evitar dudas en la aplicatoriedad del régimen de responsabilidades a la totalidad de las personas que mantengan con la Comunidad de Madrid cualquier tipo de vínculo de dependencia, laboral o estatutaria.

TÍTULO PRELIMINAR PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. ⁽²⁾

1. La Administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad de Madrid se regula por la presente Ley, por las leyes especiales aprobadas por la Asamblea de Madrid y por los preceptos que contenga la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad en cada ejercicio y durante su vigencia.

2. Tendrán carácter supletorio la Ley General Presupuestaria ⁽³⁾, las demás normas del Derecho Administrativo y, a falta de éstas, las de Derecho Privado.

Artículo 2. ⁽⁴⁾

1. La Hacienda de la Comunidad de Madrid, a los efectos de esta Ley, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Comunidad, a sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos.⁽⁵⁾

⁽²⁾ Véase art. 51 y ss. del E.A. (§ I.2).

⁽³⁾ Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

⁽⁴⁾ Véase art. 157 C.E.(§ I.1); art. 53 E.A. (§ I.2); art. 4 de la L.O.F.C.A. (§ VI.1) y art. 15 L.A.I. (§ I.7)

⁽⁵⁾ Apartado modificado por la D.A. 8ª de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001).

2. A las Instituciones de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su normativa propia, le será de aplicación el régimen establecido para la Administración de la Comunidad en la presente Ley en lo no previsto en aquélla.⁽⁶⁾

Artículo 3.⁽⁷⁾

La administración de la Hacienda de la Comunidad de Madrid cumplirá sus obligaciones económicas mediante la gestión y aplicación de su haber conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y, además, atenderá a la ordenación de lo que en materia de política económica y financiera sea de la competencia de la Comunidad.

La Comunidad de Madrid actuará en las materias propias de su Hacienda Pública conforme a los principios de legalidad, eficacia, control, universalidad, solidaridad intrarregional y coordinación entre sus órganos y Entidades, y de acuerdo con los principios constitucionales y del Estatuto de Autonomía.

Artículo 4.⁽⁸⁾

1. Los Organismos Autónomos de la Comunidad se clasifican a los efectos de esta Ley, en la forma siguiente:

- a) Organismos Autónomos administrativos, que son aquellos que prestan servicios públicos, sujetos al régimen administrativo.
- b) Organismos Autónomos mercantiles, que son aquellos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

2. Los Organismos Autónomos se registrarán por las disposiciones de esta Ley, según la anterior clasificación, y por las demás que les sean de aplicación en las materias no reguladas por la misma.

3. A los efectos de esta Ley los Órganos de Gestión sin personalidad jurídica se entiende que forman parte de la Consejería u Organismo Autónomo de que dependan, siéndoles de aplicación el régimen regulador de aquéllos, salvo las peculiaridades de su propia organización y competencias.

⁽⁶⁾ En cuanto a la Asamblea, véase Disposición Adicional Primera de esta Ley. La regulación del régimen económico-financiero de la Asamblea de Madrid, está contenida en el Reglamento de régimen interior de la Asamblea de Madrid, aprobado por Acuerdo de la Mesa del 3 de diciembre de 2001, por el que se acuerda la reforma global del reglamento de régimen interior y en los artículos 89 y ss. del Reglamento de la Asamblea (§ 1.5). Respecto de la Cámara de Cuentas véase artículo 3 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, (§ V.1) y D.A. 9ª de esta Ley.

⁽⁷⁾ Véase artículo 6 de la L.G.P.

⁽⁸⁾ Véase art. 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid (§ 1.7). La definición del sector público estatal y el régimen jurídico aplicable está regulado, a efectos presupuestarios, en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 5.⁽⁹⁾

1. Son Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid, a efectos de esta Ley:

- a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos.
- b) Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia que en virtud de Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.

2. Las Empresas Públicas se regirán por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que les sea de aplicación la presente Ley o cualquier otra aprobada por la Asamblea de Madrid, en lo no regulado por la misma.

3. La gestión de las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid se coordinará con la Administración de la Hacienda de la misma en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 6.

El resto de Entes del sector público de la Comunidad no incluidos en los artículos anteriores se regirá por su normativa específica.

En todo caso, se aplicarán a los citados Entes las disposiciones de la presente Ley que expresamente se refieran a los mismos⁽¹⁰⁾ y, con carácter supletorio, las relativas a materias no reguladas en sus normas específicas.

Artículo 7.

Se regularán por Ley de la Asamblea las siguientes materias relativas a la Hacienda Autónoma:

- a) Los Presupuestos Generales de la Comunidad.⁽¹¹⁾
- b) La concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, según previene esta Ley.⁽¹²⁾
- c) La determinación de los elementos básicos de la relación tributaria y el establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y demás bonificaciones de sus propios tributos.⁽¹³⁾
- d) El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo decimosegundo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.⁽¹⁴⁾

⁽⁹⁾ Artículo modificado por la D.A. 8ª de la Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001). Véase art. 79 y ss. de la presente Ley. Véase art. 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid (§ I.7).

⁽¹⁰⁾ Véanse arts. 46 y 79 y ss. de la presente Ley.

⁽¹¹⁾ Véase art. 16 del E.A. (§ I.2).

⁽¹²⁾ Véase art. 58 de la presente Ley.

⁽¹³⁾ Véase art. 59 del E.A. (§ I.2)

⁽¹⁴⁾ Véase art. 59 del E.A. (§ I.2) y artículo 12 de la L.O.F.C.A. (§ V.1).

- e) El régimen de Patrimonio de la Comunidad en el marco de la legislación básica estatal.⁽¹⁵⁾
- f) El régimen de contratación de la Comunidad, en el marco de la legislación básica estatal.⁽¹⁶⁾
- g) El régimen de contratación y obligaciones financieras y la utilización de endeudamiento, en los términos que se regulan en esta Ley.⁽¹⁷⁾
- h) Las demás materias que, según las leyes, hayan de ser reguladas por disposiciones del expresado rango.

Artículo 8.

Corresponde al Consejo de Gobierno en las materias objeto de esta Ley:

- a) El ejercicio de la potestad reglamentaria dentro del marco establecido por la Ley.
- b) La aprobación del proyecto de Presupuesto de la Comunidad y su remisión a la Asamblea.⁽¹⁸⁾
- c) La ejecución del Presupuesto aprobado sin perjuicio de las especialidades contenidas en las Leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad.
- d) Autorizar los gastos en los supuestos que determina la presente Ley.⁽¹⁹⁾
- e) La presentación de proyectos de Ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
- f) La presentación de proyectos de Ley relativos al establecimiento, modificación o supresión de los tributos de la Comunidad, de las exenciones y bonificaciones que les afecten, así como de los recargos sobre los impuestos del Estado.
- g) Dirigir la política económica y financiera, ejerciendo las funciones ejecutivas y administrativas correspondientes sobre la materia.
- h) Realizar las operaciones de crédito y endeudamiento en los términos regulados por disposiciones con rango de Ley.
- i) Las demás funciones o competencias que le atribuyen las leyes.⁽²⁰⁾

⁽¹⁵⁾ Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001).

⁽¹⁶⁾ La Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma del E.A. modifica el artículo 27 incluyendo los contratos y concesiones administrativas en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid.

⁽¹⁷⁾ Véase artículo 90 y siguientes de esta Ley.

⁽¹⁸⁾ Véase art. 61.1 de E.A. (§ I.2) y art. 21.h) de la L.G.A. (§ I.6).

⁽¹⁹⁾ Véase art. 55 y 69 de esta Ley.

⁽²⁰⁾ Véase artículo 21 de la L.G.A. (§ I.6)

Artículo 9.

1. La Consejería de Hacienda⁽²¹⁾ es el órgano superior de la Administración de la Comunidad en las materias objeto de esta Ley.

2. Corresponde al Consejero de Hacienda en las materias a que se refiere el apartado anterior:

- a) Proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y los acuerdos que procedan según el artículo anterior, con excepción de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 10 de esta Ley.
- b) Elaborar y someter el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad al Consejo de Gobierno para su aprobación.
- c) Dictar las disposiciones y resoluciones que procedan en las materias a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
- d) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Administración de la Comunidad.
- e) Velar por la ejecución del presupuesto y por el cumplimiento de las disposiciones de carácter financiero.
- f) Ejercer la superior autoridad sobre la ordenación de los pagos y su efectiva realización. Nombrar a los titulares de las Ordenaciones secundarias de pagos que se establezcan.⁽²²⁾
- g) Dirigir la ejecución de la política financiera aprobada por el Consejo de Gobierno y dictar las disposiciones necesarias a tal fin, en el marco establecido en el artículo 8.g) de la presente Ley.
- h) El ejercicio de las competencias que en materia de tutela financiera de los Entes locales y de control de las instituciones financieras y de crédito tenga atribuidas la Comunidad de Madrid.
- i) Las demás funciones o competencias que le confieran las Leyes.

Artículo 10.⁽²³⁾

Dentro de su respectiva competencia y en los términos establecidos por la presente Ley, son funciones de los Órganos Superiores de Gobierno y Administración de la Comunidad:

- a) Administrar los créditos para gastos de los Presupuestos de la Comunidad y sus modificaciones.⁽²⁴⁾
- b) Contraer obligaciones económicas en nombre o por cuenta de la Comunidad de Madrid, dentro de las limitaciones establecidas en las leyes anuales de Presupuestos Generales.

⁽²¹⁾ Véase Decreto de estructura orgánica en § I.10.

⁽²²⁾ Véase art. 111 de esta Ley.

⁽²³⁾ Véase art. 1 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración (§ I.6).

⁽²⁴⁾ Véase art. 69 de esta Ley.

- c) Autorizar los gastos que no sean de la incumbencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia.⁽²⁵⁾
- d) Proponer el pago de las obligaciones al Consejero de Hacienda.⁽²⁶⁾
- e) Las demás que les confiera la Ley.⁽²⁷⁾

Artículo 11.

Son funciones de los Organismos Autónomos de la Comunidad, dentro del ámbito de su respectiva competencia y conforme a lo dispuesto en esta Ley:

- a) La aprobación del anteproyecto del Presupuesto del Organismo.⁽²⁸⁾
- b) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del propio Organismo Autónomo.
- c) Autorizar los gastos y ordenar los pagos según el presupuesto aprobado, con las especialidades contenidas en su Ley de creación.⁽²⁹⁾
- d) Las demás que les asignen las leyes.

Artículo 12.⁽³⁰⁾

En la gestión de los derechos económicos de naturaleza pública y en el cumplimiento de todas sus obligaciones, la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos gozarán de las prerrogativas, potestades y privilegios reconocidos al Estado por las leyes, así como de idéntico tratamiento fiscal.

Artículo 13.⁽³¹⁾

La Tesorería, gestionada bajo criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, se inspira en el principio de caja única.

En la Tesorería General de la Comunidad se integrarán y custodiarán los fondos y valores de la Hacienda, con respeto a las peculiaridades propias de las Empresas y Entes Públicos.

⁽²⁵⁾ Véanse arts. 55 y 69.1 de esta Ley.

⁽²⁶⁾ Artículo 9.f) de esta Ley

⁽²⁷⁾ Artículo 31 de la L.G.A. (§ 1.6)

⁽²⁸⁾ Véase art. 10.1.a) de la L.A.I. (§ 1.7).

⁽²⁹⁾ Véase artículo 69.2 de esta Ley.

⁽³⁰⁾ Véase art. 2.3 de la L.O.F.C.A. (§ VI.1), art. 9 de la L.G.P., art. 36 del E.A. (§ 1.2) y art. 28 de esta Ley.

⁽³¹⁾ Véase art. 104 y ss. de esta Ley.

Artículo 14.⁽³²⁾

La Administración de la Hacienda de la Comunidad de Madrid está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por la Asamblea.

El Presupuesto de la Comunidad será único, por programas con indicación de objetivos de actuación, e incluirá la totalidad de los ingresos y gastos del sector público de la Comunidad de Madrid.

Artículo 15.

El cumplimiento de los programas de gastos e inversiones públicas, sean generales o sectoriales, de vigencia plurianual, se acomodará a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Ley y a los límites y demás condiciones que establezca la Ley anual de Presupuestos de la Comunidad.

Artículo 16.⁽³³⁾

1. La Intervención General de la Comunidad ejercerá las funciones previstas en el artículo 83 de esta Ley, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice.

2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión, o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda se ajuste a las disposiciones legales aplicables en cada caso.⁽³⁴⁾

Artículo 17.⁽³⁵⁾

1. El control de carácter financiero se ejercerá por la Intervención General de la Comunidad, de conformidad con lo prevenido en cada caso respecto a los servicios, Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, para comprobar su funcionamiento en el aspecto económico-financiero y conforme a las disposiciones y directrices que les rijan. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente.

2. El preceptivo control de eficacia se ejercerá mediante análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así como del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes programas.

⁽³²⁾ Véase art. 61 E.A. (§ I.2) y 51 de esta Ley.

⁽³³⁾ Véase art. 82 y ss. de esta Ley.

⁽³⁴⁾ Véanse arts. 6 y ss. del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 24-IV) (§ V.3).

⁽³⁵⁾ Véase artículo 30 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 24-IV) (§ V.3). Véase artículo 3 del Decreto 153/2000 por el que se establece el régimen de control interno de los servicios transferidos en materia de enseñanza no universitaria (§ V.4).

3. La Intervención General de la Comunidad elaborará un plan anual de auditorías en el que se irán incluyendo la totalidad de los sujetos mencionados en el apartado 1 del presente artículo, del que se dará cuenta a la Asamblea con ocasión de la presentación del proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales. De los resultados a los que se hubiere llegado en dichas auditorías, por el Consejo de Gobierno se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos y Hacienda al finalizar el correspondiente ejercicio económico.⁽³⁶⁾

Artículo 18.^{(37) (38)}

Con independencia de las funciones interventoras que se regulan en la presente Ley, la Intervención General de la Comunidad de Madrid podrá ejercer el control de carácter financiero, en la forma que específicamente se establezca para cada caso, respecto de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas que se concedan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid o fondos de la Unión Europea que sean gestionados por la Comunidad de Madrid.

Artículo 19.⁽³⁹⁾

La Hacienda de la Comunidad queda sometida al régimen de contabilidad, tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad, como para facilitar datos e información en general que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 20.⁽⁴⁰⁾

Las autoridades y el personal al servicio de la Comunidad en general, que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa o negligencia perjudiquen a la Hacienda de la Comunidad, incurrirán en las responsabilidades civil, penal o disciplinaria que en cada caso proceda.

⁽³⁶⁾ Véanse artículos 32 y 37 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

⁽³⁷⁾ Redacción dada por el artículo 3 de la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 02-I-1998).

⁽³⁸⁾ Véase Título III del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 24-IV-1997) (§ V.3).

⁽³⁹⁾ Véase art. 113 y ss. de esta Ley.

⁽⁴⁰⁾ Véase art. 129 y ss. de esta Ley, Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (B.O.E. 21-V-1992), Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (B.O.E. 7-IV-1988) y art. 13 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (§ V.1).

TÍTULO I DEL RÉGIMEN DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD

CAPÍTULO I Los derechos de la Hacienda de la Comunidad⁽⁴¹⁾

Artículos 21 y 22.⁽⁴²⁾

Artículo 23.⁽⁴³⁾

Son derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad:

1. Los rendimientos de sus propios tributos.⁽⁴⁴⁾
2. Los recargos que establezca la Comunidad sobre impuestos estatales, en los términos que establezca la Ley reguladora de los mismos.⁽⁴⁵⁾
3. Las asignaciones complementarias que se establezcan, en su caso, en los Presupuestos Generales del Estado, con destino a la Comunidad de Madrid.
4. Las participaciones en los impuestos estatales no cedidos.
5. Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.⁽⁴⁶⁾
6. Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros fondos destinados a favorecer el desarrollo regional.⁽⁴⁷⁾
7. Los rendimientos derivados del patrimonio de la Comunidad y los ingresos de Derecho Privado, herencias, legados y donaciones.

⁽⁴¹⁾ La redacción del título de este capítulo se debe a la D.A. 8ª de la Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 03-VII-2001).

⁽⁴²⁾ Artículos derogados por la D.D. 2ª de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 03-VII-2001).

⁽⁴³⁾ Véase art. 157 de la Constitución (§ I.1); 53.1 del E.A. (§ I.2) y artículo 4 de la L.O.F.C.A. (§ VI.1).

⁽⁴⁴⁾ Véase Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 29-X-2002)

⁽⁴⁵⁾ Véase Ley 16/1991, de 18 de diciembre del Recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas (B.O.C.M. 23-XII-91, c.e. 15-I-92), modificada por Ley 17/1995, de 16 de octubre. El recargo queda establecido en el 20% de las cuotas mínimas municipales.

⁽⁴⁶⁾ Véase Ley 14/1996, de 30 de diciembre, (B.O.E. 31-XII) de Cesión de Tributos del Estado y medidas fiscales complementarias, cuyo art. 26 deroga el régimen establecido anteriormente respecto de aquellas Comunidades Autónomas que asumen el nuevo sistema de financiación. Véase Ley 30/2002, de 1 de julio, de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid, y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (B.O.E. 2-VII-2002). Véase la Disposición Adicional Primera del E.A. (§ I.2).

⁽⁴⁷⁾ Véase la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan los Fondos de Compensación Interterritorial.(B.O.E. 31-XII-2001) (§ VI.4).



8. Los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones, en el ámbito de sus competencias.
9. El producto de las operaciones de crédito.
10. Cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las leyes.

Artículo 24.

Los recursos de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos y de sus Empresas y Entes Públicos, estarán destinados a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por Ley se establezca su afectación para fines determinados.⁽⁴⁸⁾

Artículo 25.

1. La administración de los recursos de la Hacienda de la Comunidad corresponde, según su titularidad, a la Consejería de Hacienda o a los Organismos Autónomos o Empresas y Entes Públicos, con el control que la Ley establece.
2. Las personas o Entidades que tengan a su cargo la administración de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad dependerán de la Consejería de Hacienda o del correspondiente Organismo Autónomo o Empresa o Ente Público en todo lo relativo a su gestión, entrega o aplicación y a la rendición de las respectivas cuentas.
3. Estarán obligados a la prestación de fianza el personal al servicio de la Comunidad, entidades o particulares que manejen o custodien fondos o valores de naturaleza pública, en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias
4. Los rendimientos e intereses atribuibles al Patrimonio de la Comunidad y sus Organismos Autónomos por cualquier concepto serán íntegramente reflejados en una rúbrica específica del Presupuesto respectivo.

Artículo 26. ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾

1. La gestión de los tributos de la Comunidad se ajustará a su normativa propia y demás leyes aplicables.
2. Corresponde al Consejero de Hacienda aprobar los Convenios y dictar las normas de gestión correspondientes a la recaudación voluntaria y ejecutiva que la Comunidad, de acuerdo con los Ayuntamientos de su demarcación, asumiera en lo referente a tributos locales en el marco de la legislación estatal, local y sus normas de desarrollo.

⁽⁴⁸⁾ El artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, establece: "El rendimiento de las tasas y precios públicos se aplicará en su totalidad a la cobertura de las obligaciones de la Comunidad de Madrid, salvo que, a título excepcional y mediante ley, se establezca una afectación concreta". El artículo 25.2 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 21-III, c.e. 23-IV) modificada por Ley 11/1997, de 28 de abril, dispone lo siguiente: "Los importes de las sanciones e indemnizaciones obtenidas por la Comunidad de Madrid por daños y perjuicios causados en carreteras y en sus elementos funcionales, estarán afectados a la conservación de las carreteras e infraestructuras viarias, mediante la generación de crédito, por idéntica cuantía, en las aplicaciones presupuestarias destinadas a tal efecto".

⁽⁴⁹⁾ Los apartados 4, 5, 6 y 7 han sido añadidos por la Ley 28/1997, de 26 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 2-1-1998). El apartado 8 ha sido añadido por la Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

⁽⁵⁰⁾ La regulación del sistema de recaudación de ingresos en la Comunidad de Madrid fue desarrollada por la Orden 3097/1996, de 9 de diciembre, del Consejero de Hacienda, sobre recaudación de ingresos (§ II.7)

3. Corresponde al Consejero de Hacienda organizar los servicios relativos a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los derechos de la Hacienda, de acuerdo con las facultades de la Comunidad en la materia, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

4. La gestión recaudadora será dirigida, bajo la autoridad del Consejero de Hacienda, por los órganos directivos de esta Consejería que tengan atribuida esta competencia. Las respectivas competencias de estos órganos serán las que se establezcan en las distintas leyes y reglamentos, así como en las normas que, al efecto dicte la Consejería de Hacienda.

5. A efectos de la recaudación en período ejecutivo de los tributos e ingresos de derecho público que, por ser propia o concertada con otras Administraciones Públicas, corresponda a la Comunidad de Madrid, podrán establecerse en el ámbito territorial de esta Comunidad una o más zonas de recaudación.

6. Al frente de cada una de las zonas de recaudación a que se refiere el artículo anterior habrá un recaudador titular, con los deberes y derechos que reglamentariamente se establezcan.

Los recaudadores titulares de la Comunidad de Madrid son órganos unipersonales que tienen el carácter de agentes de la Hacienda autonómica dentro de sus respectivas zonas y, en el ejercicio de sus funciones tienen los derechos y prerrogativas inherentes a la condición de autoridad.

La selección y nombramiento de recaudador titular será competencia del Consejero de Hacienda tras un proceso de convocatoria pública entre funcionarios en los que concurran las condiciones que se determinen reglamentariamente.

El recaudador titular tendrá derecho a percibir la retribución que se fije reglamentariamente, que estará necesariamente en función del trabajo desarrollado.

Siempre que sea necesario para el ejercicio de sus funciones, el recaudador titular podrá solicitar la cooperación y auxilio de la autoridad en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación.

7. El recaudador titular nombrará a su personal colaborador, acomodándose a las disposiciones laborales vigentes, con sujeción a la plantilla que para cada zona establezca la Consejería de Hacienda.

El personal colaborador no tendrá relación laboral o administrativa alguna con la Comunidad Autónoma, sino únicamente relación laboral con el recaudador titular.

8. La gestión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones⁽⁵¹⁾ corresponde, en su respectivo ámbito territorial, a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario a cargo de los Registradores de la Propiedad. La remuneración y el régimen de tales oficinas se establecerá mediante convenio, el cual determinará también el plazo de duración, que no podrá exceder de cuatro años, prorrogables por otros dos así como el número de oficinas liquidadoras.

En el ejercicio de tales funciones, el Registrador de la Propiedad a cargo de dicha oficina será el responsable, en nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid, de la aplicación efectiva del sistema tributario autonómico en el marco de las funciones y dentro del territorio que tuviere asignado y a estos efectos serán considerados como administración tributaria territorial de la Comunidad de Madrid.

⁽⁵¹⁾ Por Decreto 81/1996, de 30 de mayo, se encomienda la gestión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras que se designan (B.O.C.M. 06-VI-1996).

Los Registradores de la Propiedad al frente de una oficina liquidadora de distrito hipotecario dependerán en el ejercicio de sus funciones, de la Consejería de Hacienda, quien podrá delegar las facultades de coordinación, vigilancia y ordenación de pagos en el Director General de Tributos.

Los Registradores de la Propiedad podrán designar su personal colaborador, el cual no tendrá relación laboral ni administrativa con la Comunidad Autónoma.

Artículo 27.

1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad o sus Organismos Autónomos fuera de los casos regulados por las Leyes.⁽⁵²⁾
2. Tampoco se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda, sino en los casos y en la forma que determinen las leyes.

Artículo 28.⁽⁵³⁾

1. Para realizar el cobro de los tributos y de las cuantías que como ingresos de Derecho Público debe percibir, la Hacienda de la Comunidad ostentará las prerrogativas establecidas legalmente y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Salvo que una ley especial prevea otra cosa, las actuaciones y procedimientos de gestión recaudatoria a realizar por la Comunidad de Madrid serán los previstos en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.^{(54) (55)}

2. En el caso de concurrencia de derechos, prevalecerán los de la Administración de la Comunidad sobre sus Organismos Autónomos.
3. A los fines previstos en el apartado 1, la Hacienda de la Comunidad de Madrid gozará, entre otras, de las prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública en la Ley General Tributaria.⁽⁵⁶⁾
4. Salvo que leyes especiales prevean otra cosa, el procedimiento de notificación de aquellos débitos relacionados en el artículo 29.3 de esta Ley, será el regulado en la Ley General Tributaria.^{(57) (58)}
5. Una vez concluida la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio para los ingresos de derecho público no tributario mientras no concluya el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Si durante ese plazo, el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del

⁽⁵²⁾ Véase la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 03-VII-2001).

⁽⁵³⁾ Véase art. 36 E.A. (§ 1.2), así como los arts. 31 y 32 de la L.G.P. y artículo 12 de esta Ley.

⁽⁵⁴⁾ Párrafo añadido por el artículo 6 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2005).

⁽⁵⁵⁾ Por Orden de 19 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria en los aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 30-XII-2013).

⁽⁵⁶⁾ Nueva redacción dada al apartado 3 por el artículo 8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 1-VI-2004, c.e. 26-VII-2004).

⁽⁵⁷⁾ Incorporado el apartado 4 por la Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1998).

⁽⁵⁸⁾ Véase la Orden 3530/1998, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda, sobre aplicación de las modificaciones introducidas en el procedimiento de notificación por la Ley 66/97, que modifica varios artículos de la L.G.T. (B.O.C.M. 18-XII-1998).

recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada. En cualquier caso, durante este periodo de paralización se devengará el interés de demora regulado en el artículo 32 de esta Ley. Si el órgano judicial acuerda la suspensión, ésta se mantendrá hasta la resolución del recurso. Si se deniega la suspensión, el órgano competente para la gestión de la deuda requerirá de pago al deudor, concediéndole el plazo previsto para el pago de dudas en periodo voluntario en la Ley General Tributaria, contado a partir de la fecha de recepción del requerimiento citado.⁽⁵⁹⁾

Artículo 29.⁽⁶⁰⁾

1. El órgano competente para la realización de todas las actuaciones de gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de las deudas citadas en el artículo anterior será la Consejería competente en materia de Hacienda.⁽⁶¹⁾

2. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y se le requerirá para que se efectúe su pago con el recargo correspondiente. Si el deudor no efectuara el pago dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.⁽⁶²⁾

3. La providencia anterior es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago, en los términos previstos en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones aplicables.⁽⁶³⁾

4. El procedimiento de apremio sólo será utilizado para el cobro de las deudas correspondientes a tributos y demás ingresos de derecho público.

5. No se podrá contratar con la Comunidad ni percibirse subvenciones de la misma por parte de quienes tengan deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. Los órganos de la Comunidad competentes en materia de contratación o de concesión de subvenciones se dirigirán a la Consejería de Hacienda para solicitar el certificado que acredite la inexistencia de apremio.⁽⁶⁴⁾

⁽⁵⁹⁾ Nueva redacción dada al apartado 5 por el artículo 6 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2005).

⁽⁶⁰⁾ Artículo modificado por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1999).

⁽⁶¹⁾ Véase la Orden 3097/1996, de 9 de diciembre, sobre recaudación de ingresos que se reproduce en el § II.7.

⁽⁶²⁾ Véase nota a pie de página del § II.7. Véase también la Resolución de 22-XI-95, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se da publicidad al convenio entre la Comunidad de Madrid y la A.E.A.T. en materia de recaudación en vía ejecutiva (B.O.C.M. 04-XII-1995).

⁽⁶³⁾ Nueva redacción dada al apartado 3 por el artículo 8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 01-VI-2004, c.e. 26-VII-2004).

⁽⁶⁴⁾ Apartado modificado por el artículo 6 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 28-XII-2001). Véase art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (L.C.S.P.), relativo a prohibiciones para contratar. Asimismo art. 8 e) de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid (§ IV.1) y la Orden 2532/1998 reguladora de la obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por los beneficiarios de subvenciones, ayudas públicas y transferencias de la Comunidad de Madrid (§ IV.4).

Artículo 30.

1. En ningún caso podrán suspenderse los procedimientos administrativos de apremio por virtud de recursos interpuestos por los interesados si no se realiza el pago del débito, se consigna su importe o se garantiza éste en la forma reglamentariamente establecida.

2. Si contra dichos procedimientos se opusieran reclamaciones, en concepto de tercería o por otra acción de carácter civil, por persona que no tenga responsabilidad para con la Hacienda de la Comunidad, en virtud de obligación o gestión propia o transmitida, se suspenderán dichos procedimientos sólo en la parte que se refiera a los bienes o derechos controvertidos, sustanciándose este incidente en la vía administrativa como previa a la judicial.

Si la tercería fuere de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la tercería.

Cuando la reclamación fuese denegada en la vía administrativa proseguirá el procedimiento de apremio, a no ser que de la ejecución puedan derivarse perjuicios de imposible o difícil reparación, en cuyo caso, la Comunidad podrá acordar la suspensión de aquél, siempre que se adopten las medidas reglamentarias de aseguramiento de los respectivos créditos.

Asimismo, podrá suspenderse el procedimiento de apremio sin los requisitos establecidos en el apartado uno de este artículo, si el interesado demuestra que ha existido en su perjuicio error de hecho, material o aritmético, en la determinación de la deuda que se le exija.

Artículo 31.

La efectividad de los derechos de la Hacienda de la Comunidad no comprendidos en el artículo 28 de esta Ley, se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho Privado.

Artículo 32.

1. Las cantidades correspondientes a tributos y demás ingresos de derecho público adeudadas a la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos devengarán interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento. Se incluyen en este apartado las cantidades recaudadas a través de entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda que no sean ingresadas por dichas entidades en la Tesorería en los plazos establecidos.⁽⁶⁵⁾

2. El tipo de interés aplicable a todas las deudas de derecho público será el interés de demora previsto en la Ley General Tributaria.⁽⁶⁶⁾

⁽⁶⁵⁾ Redacción dada al apartado 1 por Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1998). Véase el artículo 17 de la L.G.P.

⁽⁶⁶⁾ Para 2005 el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el 5% (D.A. 5ª de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2005). Para 2006 el interés de demora será del 5% (D.A. 21ª de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006). Para 2007 el interés de demora será del 6,25% (D.A. 30ª de la Ley 42/2006, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007). Para 2008 el interés de demora será del 7% (D.A. 34ª de la Ley 51/2007, de Presupuestos Generales del Estado para 2008). Durante 2009 el interés de demora será del 7% (D.A. 27ª de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para 2009) hasta 1 de abril y del 5% hasta 31 de diciembre (art. 1 del R.D.L. 3/2009, B.O.E. 31-03-2009). Para 2010 el interés de demora queda fijado en el 5% (D.A. 18ª de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010). Para 2011 el interés de demora queda fijado en el 5% (D.A. 17ª de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011). Para 2012 el interés de demora queda fijado en el 5% (D.A. 13ª de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2012). Para 2013 el interés de demora queda fijado en el 5% (D.A. 39ª de la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013). Para 2014 el interés de demora queda fijado en el 5% (D.A. 32ª de la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014). Para 2015 el interés de demora queda fijado en el 4,375% (D.A. 32ª de la Ley



Para aquellos débitos de derecho privado a favor de esta Comunidad, el tipo de interés aplicable será el interés legal del dinero vigente el día del vencimiento de la deuda.⁽⁶⁷⁾

Artículo 33.

Los actos y contratos realizados en perjuicio de la Hacienda de la Comunidad, por quienes resulten deudores de ella, serán rescindibles con arreglo a las disposiciones del Derecho Privado.

Artículo 34.⁽⁶⁸⁾

La representación y defensa de la Hacienda de la Comunidad ante los Jueces y Tribunales, se realizará conforme a lo previsto en el artículo 447 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial y de acuerdo con las disposiciones que regulan la actuación en juicio.

Artículo 35.⁽⁶⁹⁾

1. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno.

2. La suscripción por la Hacienda de la Comunidad de los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las secciones 1ª y 8ª del Título XII y en la sección 6ª del Título XIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, requerirá únicamente autorización del Consejero de Hacienda.

Artículo 36.⁽⁷⁰⁾

1. Salvo lo establecido por las Leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos: ⁽⁷¹⁾

- a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para 2015). Para 2016 el interés de demora queda fijado en el 3,75% (D.A. 34ª de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016). Para 2017 el interés de demora queda fijado en el 3,75% (D.A. 44ª de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para 2017). Para 2018 el interés de demora queda fijado en el 3,75% (D.A. 57ª de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018). Como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, el interés de demora para 2019 sigue fijado en el 3,75%. Como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, el interés de demora para 2020 sigue fijado en el 3,75%. Para 2021 el interés de demora queda fijado en el 3,75% (D.A. 49ª de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021). Para 2022 el interés de demora queda fijado en el 3,75% (D.A. 46ª de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022). Para 2023 el interés de demora queda fijado en el 4,0625% (D.A. 42ª de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 2023). Como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, el interés de demora para 2024 sigue fijado en el 4,0625%.

⁽⁶⁷⁾ Nueva redacción dada al apartado 2 por el artículo 8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 1-VI-2004, c.e. 26-VII-2004). Véase el tipo de interés legal del dinero en nota al artículo 41.

⁽⁶⁸⁾ Véase artículo 1 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 12-IV-1999).

⁽⁶⁹⁾ Véase art. 10 de la L.G.P. Véase el artículo 21 x) L.G.A. (§ 1.6). Véase la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

⁽⁷⁰⁾ Véase art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

⁽⁷¹⁾ Redacción dada a este párrafo por la Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1998).



- b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

2. La prescripción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda de la Comunidad se interrumpirá conforme a la Ley General Tributaria y se aplicará de oficio.

Artículo 37.

1. Los derechos de la Hacienda de la Comunidad declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

2. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya dado lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda de la Comunidad se ajustará a lo prevenido en el Título VII de la presente Ley.

3. Se autoriza a la Consejería de Hacienda para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen en la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad.⁽⁷²⁾

CAPÍTULO II

Las Obligaciones de la Hacienda de la Comunidad

Artículo 38. ⁽⁷³⁾

Las obligaciones económicas de la Hacienda de la Comunidad nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen.

Artículo 39. ⁽⁷⁴⁾

1. Las obligaciones de pago son exigibles de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos cuando resultan de la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, apartado 3, de esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.

⁽⁷²⁾ Véase art. 16 de la L.G.P. El artículo 43 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2012 habilita al Consejero de Economía y Hacienda a determinar la cuantía por Orden. La Orden de 4 de febrero de 2010 fija la cantidad estimada como mínima para cubrir el coste de exacción en 6 euros (B.O.C.M. 09-III-2010).

⁽⁷³⁾ Véase art. 20 de la L.G.P.

⁽⁷⁴⁾ Véase art. 21 de la L.G.P.



2. Si dichas obligaciones tienen por causa las prestaciones o servicios a la Administración, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.⁽⁷⁵⁾

Lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá ser exceptuado en los supuestos de encargos y mandatos en el marco de los convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Madrid, a través del correspondiente plan económico financiero, siendo necesario el informe favorable de la Consejería de Presidencia y Hacienda, en cuanto al porcentaje de pagos a efectuar en concepto de anticipos y garantías, con carácter previo al reconocimiento de la obligación.⁽⁷⁶⁾

En los contratos sometidos al Derecho Privado se atenderá a sus propios usos y costumbres, a tenor de lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratos del Estado. El Consejero de Hacienda determinará, en su caso, las garantías a adoptar para el aseguramiento del cumplimiento de la obligación.⁽⁷⁷⁾

Artículo 40.⁽⁷⁸⁾

1. Los derechos, fondos, valores y bienes en general de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos son inembargables.⁽⁷⁹⁾

2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos corresponderá exclusivamente a la autoridad administrativa que sea competente por razón de la materia, la cual acordará el pago en la forma y límites autorizados. Dichas resoluciones se cumplirán en sus propios términos.

3. Si para el pago fuese necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse de la Asamblea de Madrid uno u otro, dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

⁽⁷⁵⁾ La citada “regla del servicio hecho” aparece recogida también en el artículo 73 de esta Ley, artículo 198.1 y 3 de la L.C.S.P y en el artículo 10 de la Ley de Subvenciones (§ IV.1).

⁽⁷⁶⁾ Párrafo añadido por el artículo 6 de la Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (29-XII-2000). Véase artículo 10 de la Ley de Subvenciones (IV.1).

⁽⁷⁷⁾ La referencia debe entenderse hecha a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, véase arts.12 y 26 de la L.C.S.P.

⁽⁷⁸⁾ Véase art. 23 de la L.G.P.

⁽⁷⁹⁾ Véase artículo 9 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001).

Artículo 41.

1. Si las Instituciones o la Administración de la Comunidad o sus Organismos Autónomos no pagaran a sus acreedores dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrán de abonarle el interés señalado en el artículo 32 de esta Ley sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.⁽⁸⁰⁾

2. Cuando se trate de devoluciones de ingresos indebidos que tengan su origen en créditos tributarios o cualesquiera otros de derecho público, el tipo de interés a aplicar será el regulado en el artículo 32.2 de esta Ley y el plazo temporal de liquidación de los mismos abarcará desde la fecha o fechas en que se realizaron los ingresos hasta la propuesta de pago.⁽⁸¹⁾

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los ingresos indebidos que no tengan su origen en créditos de derecho público preexistente en favor de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de disposiciones, resoluciones, negocios jurídicos u otros actos sujetos al derecho administrativo, cuya devolución se regirá por lo establecido en el apartado 1.

El mismo régimen será de aplicación a las devoluciones derivadas de repeticiones de pagos de deudas u obligaciones de derecho público, o cuando la cantidad abonada sea superior al importe de la deuda u obligación de derecho público liquidada por la Administración, o autoliquidada por el sujeto pasivo en virtud de una disposición o acto que le obligase a ello.

En ningún caso el presente apartado será de aplicación a los ingresos tributarios indebidos.⁽⁸²⁾

Artículo 42.⁽⁸³⁾

1. Salvo lo establecido por leyes especiales⁽⁸⁴⁾, prescribirán a los cuatro años:

⁽⁸⁰⁾ Véase art.24 de la L.G.P. Existe normativa específica para los contratos administrativos en materia de expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. En cuanto al pago de los contratos administrativos y abono de intereses de demora, véase artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Respecto al tipo de interés legal, es el siguiente:

Año 2008	D.A. 34 ^a	Ley 51/07	5,5%
Año 2009	D.A. 27 ^a	Ley 2/08	5,5% hasta 1 abril, 4% hasta 31 diciembre (art. 1 RDL 3/2009, B.O.E. 31-III-09)
Año 2010	D.A. 18 ^a	Ley 26/09	4%
Año 2011	D.A. 17 ^a	Ley 31/10	4%
Año 2012	D.A. 13 ^a	Ley 2/12	4%
Año 2013	D.A. 39 ^a	Ley 17/12	4%
Año 2014	D.A. 32 ^a	Ley 22/13	4%
Año 2015	D.A. 32 ^a	Ley 36/14	3,5%
Año 2016	D.A. 34 ^a	Ley 48/2015	3%
Año 2017	D.A. 44 ^a	Ley 3/2017	3%
Año 2018	D.A. 57 ^a	Ley 6/2018	3%
Año 2019	D.A. 57 ^a	Ley 6/2018	3% (mientras se encuentre en vigencia los P.G.E. 2018)
Año 2020	D.A. 57 ^a	Ley 6/2018	3% (mientras se encuentre en vigencia los P.G.E. 2018)
Año 2021	D.A. 49 ^a	Ley 11/2020	3%
Año 2022	D.A. 46 ^a	Ley 22/2021	3%
Año 2023	D.A. 42 ^a	Ley 31/2022	3,25%
Año 2024	D.A. 42 ^a	Ley 31/2022	3,25% (mientras se encuentre en vigencia los P.G.E. 2023)

⁽⁸¹⁾ Apartado añadido por la Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1998).

⁽⁸²⁾ Apartado 3 añadido por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1999).

⁽⁸³⁾ Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 7/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2005).

⁽⁸⁴⁾ En cuanto a las obligaciones de naturaleza tributaria, téngase en cuenta el plazo de 4 años previsto en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Administración de la Comunidad y de sus organismos autónomos de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
- b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
- c) El derecho a la devolución de ingresos indebidos y, en su caso, los intereses correspondientes. El plazo se contará desde la fecha en que dicho ingreso hubiese sido realizado.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil.⁽⁸⁵⁾

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Comunidad que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

Artículo 43.

Las obligaciones económicas derivadas de negocios jurídicos privados se regirán por las normas de Derecho Privado en lo no regulado en la presente Ley.

TÍTULO II DE LOS PRESUPUESTOS

CAPÍTULO I Presupuestos Generales de la Comunidad

SECCIÓN 1ª Contenido y Aprobación

Artículo 44. ⁽⁸⁶⁾

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:

- a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer las Instituciones y la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos y los derechos que se prevean reconocer durante el correspondiente ejercicio.

⁽⁸⁵⁾ Véanse arts. 1930 y ss. del Código Civil.

⁽⁸⁶⁾ Véase artículo 32 de la L.G.P.



- b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las Empresas y demás Entes Públicos a los que se refieren los artículos cinco y seis de la presente Ley.

2. En los Presupuestos Generales de la Comunidad se consignará de forma ordenada y sistemática el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad.⁽⁸⁷⁾

3. Todos y cada uno de los Presupuestos integrantes de los Generales de la Comunidad deberán presentarse y aprobarse equilibrados, en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fije la normativa básica en la materia⁽⁸⁸⁾.

Artículo 45.⁽⁸⁹⁾

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural. Cuando las operaciones a realizar por los Organismos Autónomos mercantiles, las Empresas o los Entes Públicos, estén vinculadas a ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a doce meses, se realizarán los ajustes que sean necesarios. Al ejercicio presupuestario se imputarán:⁽⁹⁰⁾

- a) Los derechos reconocidos durante el mismo cualquiera que sea el periodo de que deriven.
- b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre del correspondiente ejercicio, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizadas dentro del mismo y con cargo a los respectivos créditos.

Artículo 46.⁽⁹¹⁾

Los Presupuestos Generales de la Comunidad estarán integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la presente Ley, y contendrán:

- a) Los estados de gastos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos, con la debida especificación de los créditos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones de carácter económico.
- b) Los estados de ingresos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos, comprensivos de las estimaciones de los derechos económicos a reconocer y recaudar durante el ejercicio presupuestario.
- c) Los estados de recursos, con las correspondientes estimaciones para la cobertura financiera, tanto de los gastos de explotación, como de los de capital, de las Empresas y demás Entes Públicos.

⁽⁸⁷⁾ Véase artículo 61.2 EA, § I.2, artículo 49.j) de esta Ley y artículo 21.1 LOFCA, § VI.1.

⁽⁸⁸⁾ Redacción dada al apartado 3 del artículo 44 por la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica (B.O.C.M. 09-VII-2012, BOE 13-X-2012).

⁽⁸⁹⁾ Véanse arts. 56 y 57 de la presente Ley.

⁽⁹⁰⁾ Véase Orden de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para cada ejercicio y artículos 57.2 y 77 de esa Ley.

⁽⁹¹⁾ Véase artículo 33 de la L.G.P.

Artículo 47.⁽⁹²⁾

1. La estructura de los Presupuestos Generales se determinará por la Consejería de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos integrantes del sector público de la Comunidad, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir, y la normativa que con carácter general se disponga para el sector público estatal, de forma que sea posible su consolidación con los del Estado.

2. El estado de gastos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos se estructurará de acuerdo a una clasificación orgánica, funcional o por programas y económica.⁽⁹³⁾

- a) La clasificación orgánica, que reflejará la organización administrativa de los centros gestores de gasto, agrupando los créditos para gastos por secciones, constituidas por la Asamblea, Presidencia de la Comunidad, las distintas Consejerías y las demás que se determinen.
- b) La clasificación funcional o por programas, que agrupará los créditos para gastos según la finalidad de las actividades a realizar y los objetivos a conseguir.
- c) La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos según la naturaleza económica de los gastos.

3. En los estados de gastos se presentarán los gastos corrientes, los gastos de capital, las operaciones financieras y el fondo de contingencia. En los créditos para gastos corrientes, se diferenciarán, asimismo, los gastos de personal, los de funcionamiento, los de intereses y las transferencias corrientes. En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales y las transferencias de capital. En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. El fondo de contingencia recogerá la dotación para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.⁽⁹⁴⁾

4. Los estados de ingresos de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, recogerán desagregados por capítulos el importe total de los recursos que por todos los conceptos se prevean reconocer durante el correspondiente ejercicio.

5. A los presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles se acompañarán los siguientes estados:

- a) Cuenta de operaciones comerciales.
- b) Cuenta de explotación.
- c) Cuadro de financiamiento.
- d) Estado demostrativo de la variación del fondo de maniobra.

⁽⁹²⁾ Véanse arts. 39 y 40 de la L.G.P. Por otro lado, el Art. 21, apartado 3 de la L.O.F.C.A. dispone que "Los Presupuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con criterios homogéneos de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado".

⁽⁹³⁾ Nueva redacción dada al apartado 2 del artículo 47 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽⁹⁴⁾ Redacción dada al apartado 3 del artículo 47 por Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2013, c.e. B.O.C.M. 21-I-14 y 27-III-14, BOE 26-III-2014).

Artículo 48.

El procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad se desarrollará por el Consejero de Hacienda.

Artículo 49. ⁽⁹⁵⁾

Como documentación anexa al proyecto de Ley se remitirán a la Asamblea de Madrid:⁽⁹⁶⁾

- a) Una Memoria justificativa de los créditos presupuestarios que solicita cada Consejería, organismo autónomo, empresa o ente público para el ejercicio siguiente.⁽⁹⁷⁾
- b) Una Memoria explicativa de los contenidos de los Presupuestos por programas, con mención de las principales modificaciones que presentan respecto a los que estén en vigor.
- c) Los estados consolidados de los Presupuestos.
- d) La plantilla presupuestaria del personal, en la que deberán figurar, claramente diferenciados, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada Centro Gestor, el número y las características de los que pueden ser ocupados por personal eventual, distribuido por Consejerías, así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral.
- e) El anexo de proyectos de inversión, clasificados territorialmente por municipios y explicitados por líneas de actuación.⁽⁹⁸⁾
- f) Los créditos de gastos plurianuales comprometidos.
- g) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un estado de ejecución del vigente ejercicio al mes anterior a la aprobación del anteproyecto de presupuesto por el Consejo de Gobierno.
- h) Los estados financieros de las Empresas y demás Entes Públicos.
- i) Un informe económico-financiero.
- j) Una memoria de los beneficios fiscales.⁽⁹⁹⁾
- k) Cualquier otra información que el Consejo de Gobierno estime conveniente.

⁽⁹⁵⁾ Por la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se suprimen las letras j) y k) del art. 49, pasando el contenido de las letras l) y m) anteriores a ser las actuales j) y k) (BOCM 30-XII-2008).

⁽⁹⁶⁾ Véase la documentación complementaria al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en el artículo 37.2 de la L.G.P.

⁽⁹⁷⁾ Apartado modificado por el artículo 6 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2005).

⁽⁹⁸⁾ Nueva redacción dada la letra e) del art. 49 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽⁹⁹⁾ Se adiciona una nueva letra j), según el artículo 9 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004).

Artículo 50.⁽¹⁰⁰⁾

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y la documentación anexa se remitirá a la Asamblea de Madrid antes del 1 de noviembre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación.

Artículo 51.⁽¹⁰¹⁾

1. Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

2. La prórroga no afectará los créditos para gastos correspondientes a programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.

3. Se faculta al Consejero de Hacienda a realizar las operaciones encaminadas a facilitar la conversión al nuevo presupuesto de los ingresos y gastos realizados durante el periodo de prórroga.⁽¹⁰²⁾

Artículo 52.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y la documentación anexa será objeto de publicación en sede electrónica, con la finalidad de garantizar su acceso y reforzar la transparencia de la actividad pública.⁽¹⁰³⁾

Artículo 53.⁽¹⁰⁴⁾

1. Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que se autorice por Ley de modo expreso.

2. Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y el reembolso del coste de los avales aportados por los contribuyentes como garantía, para obtener la suspensión cautelar del pago de las deudas tributarias impugnadas, en cuanto éstas fueran declaradas improcedentes y dicha declaración adquiera firmeza.

3. A los efectos del presente artículo se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes y que serán objeto de contabilización independiente.

⁽¹⁰⁰⁾ Véase artículo 61.1 del E.A. (§ I.2) y artículo 37.1 de la L.G.P. Véanse arts. 158 a 166 del Acuerdo de 7 de febrero de 2019, del Pleno de la Asamblea, por el que se aprueba el Reglamento de la Asamblea de Madrid (§ I.5).

⁽¹⁰¹⁾ Véase artículo 134.4 de la Constitución (§ I.1); 21.2 de la L.O.F.C.A. (§ VI.1), y 38 de la L.G.P.

⁽¹⁰²⁾ Véase la Orden de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, reguladora de la tramitación y documentación de las modificaciones de crédito y otras operaciones sobre los presupuestos (B.O.C.M. 23-III-2015) (§ III.1).

⁽¹⁰³⁾ Nueva redacción dada al artículo 52 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹⁰⁴⁾ Artículo modificado por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-1999).

SECCIÓN 2ª

Régimen de los créditos y sus modificaciones de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos.⁽¹⁰⁵⁾

Artículo 54.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones aprobadas conforme a esta Ley.

2. El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la clasificación económica, tendrá carácter informativo a efectos de lograr una adecuada asignación de los recursos, sin perjuicio del grado de vinculación de los créditos, el cual será a nivel de agrupaciones homogéneas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley anual de Presupuestos Generales para la Comunidad.

En todo caso tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, y los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 60 de esta ley.⁽¹⁰⁶⁾

3. No podrá comprometerse ningún gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos en el nivel de vinculación a que se refiere en el apartado anterior, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

4. Las operaciones propias de la actividad de los Organismos Autónomos Mercantiles, recogidas en la Cuenta de Operaciones mercantiles, no estarán sometidas al régimen de limitaciones establecido en esta Ley para los créditos incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos.

Artículo 55.⁽¹⁰⁷⁾

1. La autorización o realización de gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que, para cada ejercicio, autoricen los respectivos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.⁽¹⁰⁸⁾

2.⁽¹⁰⁹⁾ Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en el apartado 4 de este artículo.

⁽¹⁰⁵⁾ La Orden de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, regula la tramitación y documentación de las modificaciones de crédito y otras operaciones sobre los presupuestos (B.O.C.M. 23-III-2015) (§ III.1).

⁽¹⁰⁶⁾ Orden de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, reguladora de la tramitación y documentación de las modificaciones de crédito y otras operaciones sobre los presupuestos (B.O.C.M. 23-III-2015) (§ III.1).

⁽¹⁰⁷⁾ Redacción dada al artículo 55 por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/1996, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1997.

⁽¹⁰⁸⁾ Ver apartado IV, letras c) y d), referente a "Compromisos de gastos de carácter plurianual" y "Programas y Planes de actuación", de la Orden 549/1989, de 17 de marzo, del Consejero de Hacienda, por la que se dictan instrucciones sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones y otras operaciones sobre los créditos de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-IV-1989), vigente parcialmente (§ II.10).

⁽¹⁰⁹⁾ Nueva redacción dada a este apartado por la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 (B.O.C.M. 29-XII-2010).

3.⁽¹¹⁰⁾ La competencia para la autorización de gastos de carácter plurianual corresponde:

- a) Al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la suma del conjunto de las anualidades supere el importe fijado a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, excepto cuando se trate de reajustes y reprogramación de anualidades.
- b) Al órgano competente para acordar los arrendamientos de bienes inmuebles, cualquiera que sea su cuantía, según lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, salvo lo dispuesto para las prórrogas legales y contractuales en el último párrafo del apartado 1 del artículo 69 de esta Ley.⁽¹¹¹⁾
- c) Al Presidente de la Comunidad de Madrid, a los Consejeros respectivos y a los Gerentes de los Organismos Autónomos en el ámbito de los programas que se los adscriben, en los casos no contemplados en las letras anteriores.

Esta misma atribución corresponde a los Consejos de Administración de los Órganos de Gestión dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid o de sus Organismos Autónomos, con las excepciones que puedan resultar, según las Leyes o sus Decretos de creación de la relación de dependencia con la Consejería u Organismo a que estén adscritos.

En los supuestos anteriores será necesario informe previo de la Dirección General competente en materia de presupuestos. No obstante, no será preceptivo dicho informe, cuando la oficina presupuestaria correspondiente certifique que existe, consignado, crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio siguiente, en los siguientes casos:

- a) Cuando la ejecución del gasto se realice únicamente en la anualidad siguiente a la de adquisición del compromiso.
- b) Reajustes y reprogramación de anualidades que tengan repercusión, únicamente, en el ejercicio siguiente.

4.⁽¹¹²⁾ El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos del apartado 2 no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. En el caso de los gastos corrientes en bienes y servicios el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios

⁽¹¹⁰⁾ Nueva redacción dada al apartado 3 por la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 (B.O.C.M. 29-XII-2021).

⁽¹¹¹⁾ Los artículos 46.1 y 65.2 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 03-VII-2001), dicen:

“Artículo 46. Arrendamiento de bienes.

1. *Compete al Consejero de Presidencia y Hacienda, a propuesta de la Consejería, Organismo o Entidad interesados, acordar y resolver los arrendamientos de bienes inmuebles que la Comunidad de Madrid precise para el cumplimiento de sus fines y para la gestión de sus propios intereses.*

En los supuestos de arrendamientos con opción de compra, arrendamientos financieros y demás contratos mixtos de bienes inmuebles, tanto de arrendamiento y adquisición, como de enajenación y arrendamiento, se aplicará lo dispuesto en materia de adquisiciones en el artículo 42 y en materia de enajenaciones en el artículo 50 de esta Ley.

Los contratos de arrendamiento financiero y contratos mixtos, a que se refiere el párrafo precedente, se reputarán contratos de arrendamiento, a los efectos previstos en materia de gastos plurianuales en el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.”

“Artículo 65. Adquisición de bienes.

2. *Las competencias atribuidas en esta Ley al titular de la Consejería de Presidencia y Hacienda para la adquisición a título oneroso de cualquier titularidad sobre bienes inmuebles corresponden al Consejo de Administración del Organismo o Entidad, que las ejercerá, previo informe favorable de la Consejería de Presidencia y Hacienda, conforme a lo previsto en el Capítulo III.”*

⁽¹¹²⁾ Nueva redacción dada al apartado 4 por la Ley 15//2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024 (B.O.C.M. 29-XII-2023)..

posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió el porcentaje del 100 por 100.

Los reajustes o reprogramación de anualidades y las retenciones a que se refiere el artículo 29 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril, computarán a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes. La superación de porcentajes o del número de anualidades, en estos supuestos, no precisará la autorización del Consejo de Gobierno.⁽¹¹³⁾

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda, contratación de personal temporal, nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

En los supuestos de exención de informe a que se refiere el último párrafo del apartado 3 de este artículo, el gasto computará a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes si bien la superación de los mismos por estos expedientes no precisará la autorización de Consejo de Gobierno.

5.⁽¹¹⁴⁾ El Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá modificar los porcentajes señalados en el número 4 de este artículo, así como modificar el número de anualidades en los casos especialmente justificados, supuestos en que corresponderá también al Gobierno la autorización del gasto de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de esta Ley, a petición de la correspondiente Consejería y previos los informes que se estimen oportunos y, en todo caso, el de la Consejería de Hacienda.

Este procedimiento será igualmente aplicable en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en la legislación sobre contratos públicos, bien se pacte el abono total de su precio de una sola vez o se fraccione en distintas anualidades que no podrán ser superiores a diez desde la fecha fijada para la conclusión de las obras.⁽¹¹⁵⁾

6. Los compromisos a que se refieren los apartados anteriores deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

Artículo 56.

Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en el artículo 67 de la presente Ley.

⁽¹¹³⁾ De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo tercero añade una nueva Disposición Adicional Séptima, las subvenciones a que se refieren los artículos 24 y 25 bis de la mencionada Ley podrán ser exceptuadas de lo dispuesto en este apartado, por Acuerdo de Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda.

⁽¹¹⁴⁾ Apartado 5 modificado por el artículo 6 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 28-XII-2001).

⁽¹¹⁵⁾ La legislación reguladora de los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio está en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 31-XII-1996).

Artículo 57.⁽¹¹⁶⁾

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad.
- b) Las derivadas de compromisos de gastos adquiridos y contabilizados en ejercicios anteriores.⁽¹¹⁷⁾

⁽¹¹⁶⁾ La redacción de este artículo fue modificada por la D.A. 8ª de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 03-VII-2001)

⁽¹¹⁷⁾ La Circular 1/2001, de 7 de febrero de 2001, de la Intervención General, por la que se dan instrucciones para la fiscalización y contabilización de obligaciones de ejercicios cerrados, dispone:

La Disposición Adicional 3ª de la Ley 12/1986, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1987 facultaba para "imputar a los créditos del ejercicio corriente el pago de las obligaciones reconocidas generadas en ejercicios anteriores, sin perjuicio de su contabilización independiente".

La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece en el artículo 57.2.b) que, además de contraerse con cargo a los créditos del estado de gastos de cada ejercicio presupuestario obligaciones derivadas de prestaciones y bienes realizadas en el mismo, también "se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones...derivadas de compromisos de gastos adquiridos y contabilizados en ejercicios anteriores...".

En virtud de dicho precepto, pueden reconocerse en el ejercicio presupuestario corriente obligaciones económicas, referidas a servicios y prestaciones realizadas en el ejercicio presupuestario anterior en las que su documentación justificativa (facturas, certificaciones...) esté fechada con anterioridad a 31 de diciembre, del ejercicio anterior.

Estas obligaciones que se reconocen en un ejercicio presupuestario, pero que responden a prestaciones y bienes efectuados en ejercicios precedentes, y cuya documentación justificativa así lo evidencia, se califican como obligaciones de ejercicios cerrados, siendo identificadas en cuanto a su contabilización por la habilitación de crédito en el Capítulo 0.

Ahora bien, desde el punto normativo, ya la Ley de Hacienda omite en la regulación de las obligaciones de ejercicios cerrados el requisito de su contabilización independiente, sin perjuicio de la habilitación para su imputación al ejercicio corriente, por lo que de acuerdo con el derecho positivo no es preciso ningún procedimiento especial de contabilización.

Por otra parte, la supresión del Capítulo 0 resulta conveniente a fin de adecuar la tramitación de las obligaciones de ejercicios cerrados de acuerdo con los criterios y prácticas generalmente admitidos.

En efecto, la Administración de la Comunidad de Madrid es la única que contabiliza de forma diferenciada las obligaciones de ejercicios cerrados, circunstancia que obliga a repetidos ajustes en todos aquellos casos en los que es preciso homogeneizar los datos contables de la Administración de la Comunidad de Madrid y las restantes Administraciones Públicas.

De la misma forma, el procedimiento especial, que exige la contabilización de estos expedientes, incide en una ralentización de la tramitación administrativa, lo que justifica su modificación, en pro de los principios de eficiencia y eficacia, que deben presidir la actuación administrativa, vinculados asimismo a una simplificación de sus procedimientos.

Por ello, teniendo en cuenta la tramitación de los saldos de disposición, regulada en la Orden de 15 de septiembre de 2000, del Consejero de Presidencia y Hacienda, por la que se regulan las operaciones de cierre de fin de ejercicio y cierre contable para 2000 y la propia dicción del artículo 57 citado, que, recogiendo el supuesto jurídico, no prescribe su contabilización independiente, dicta la siguiente CIRCULAR:

- I. *La presente Instrucción se aplicará a la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos respecto a la tramitación y contabilización de las obligaciones generadas en ejercicio anterior a aquel en que se reconocen y contabilizan.*
- II. *En la contabilización presupuestaria de obligaciones, no se efectuará distinción por el ejercicio presupuestario de generación de la obligación, suprimiéndose el procedimiento especial de contabilización de obligaciones "cerrados" y, por lo tanto, el Capítulo 0.*
- III. *Por los responsables de los respectivos programas de gasto, al tramitar obligaciones generadas en ejercicios anteriores, se elaborará un documento OK, si ya se ha contabilizó con la apertura del presupuesto de gasto la fase de disposición del gasto, o un ADOK, en su caso, siempre que se acredite que a nivel de vinculación jurídica en el ejercicio en el que se generó la obligación, existía crédito adecuado y suficiente, que se elaborarán con cargo a la imputación presupuestaria que le corresponda dentro del ejercicio corriente.*
- IV. *Por las Intervenciones Delegadas se fiscalizará la propuesta de reconocimiento de la obligación, como si de una obligación de ejercicio corriente se tratase, con las comprobaciones que a tal efecto determina el artículo 24 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo de 1997, por el que se desarrolla el Régimen del Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.*

Si las obligaciones hubieran sido generadas en el ejercicio precedente con omisión de fiscalización previa, será necesario proceder a su convalidación por el Consejo de Gobierno.

En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, la Consejería de Presidencia y Hacienda podrá determinar, a iniciativa de la Consejería correspondiente, los créditos que habrán de transferirse para el pago de estas obligaciones.

3. Por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, podrá establecerse el pago aplazado en la compraventa de bienes inmuebles adquiridos por la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos, cualquiera que sea el importe de la adquisición y el desembolso inicial, pudiéndose distribuir el resto de acuerdo con las limitaciones previstas para anualidades y porcentajes de compromiso en el artículo 55 de la presente Ley, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.⁽¹¹⁸⁾

Con carácter excepcional, por Acuerdo del Gobierno, a solicitud de la Consejería, del Organismo o Entidad interesada, y a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, previo informe de la Dirección General de Patrimonio, podrá establecerse el pago aplazado en los contratos de suministro de bienes muebles de carácter inventariable cuyo precio sea superior a 249.579.000 pesetas (1.500.000 euros) dentro de las limitaciones temporales y porcentuales reguladas en el artículo 55.

Artículo 58.⁽¹¹⁹⁾

1. Cuando haya de realizarse con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en él crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, y no fuese posible su cobertura en virtud del régimen de modificaciones regulado en la presente Ley, el Consejero de Hacienda, previo asesoramiento de los servicios a su cargo, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un proyecto de Ley a la Asamblea de concesión de un crédito extraordinario en el primer caso, o de un suplemento de crédito en el segundo, y en el que se especifiquen los recursos que hayan de financiarlos.

2. Si la necesidad de crédito extraordinario o suplementario se produjera en un Organismo Autónomo de la Comunidad, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) Cuando el crédito extraordinario o suplementario no suponga aumento en los créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad,⁽¹²⁰⁾ su concesión corresponderá al Consejero de Hacienda si su importe no excede del 2 por 100 del presupuesto de gastos del Organismo Autónomo en cuestión, y al Consejo de

V. *Una vez aprobado el gasto por el órgano competente, se contabilizará el mismo en la aplicación presupuestaria propuesta, sin que la generación de la obligación en el ejercicio precedente a aquel en que se imputa presupuestariamente determine ningún procedimiento especial de contabilización.*

VI. *Lo dispuesto en la presente Instrucción se aplicará a todos los gastos, cuya propuesta se elabore y tramite a partir del 15 de febrero de 2001.*

⁽¹¹⁸⁾ El artículo 42.3 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001), establece:

“Artículo 42. Adquisición de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios a título oneroso.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 57 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, podrá diferirse el pago en cualquier modo de adquisición a título oneroso de la propiedad de bienes inmuebles en que se pacten garantías hipotecarias, censales, enfiteúticas o de otra naturaleza. En tales casos, no procederán los límites en las anualidades y porcentajes de los gastos plurianuales. Los inmuebles así adquiridos tendrán carácter patrimonial hasta que sea cancelado el gravamen constituido.”

⁽¹¹⁹⁾ Téngase en cuenta la Orden de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, reguladora de la tramitación y documentación de las modificaciones de crédito y otras operaciones sobre los presupuestos (B.O.C.M. 23-III-2015) (§ III.1). Véase artículo 55 de la L.G.P.

⁽¹²⁰⁾ La referencia debemos interpretarla referida al Presupuesto de la Comunidad de Madrid (Centro 1001).

Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, cuando excediendo de dicho porcentaje, no supere el 5 por 100.⁽¹²¹⁾

Los citados porcentajes se aplicarán acumulativamente en cada ejercicio presupuestario.

- b) En cualquier caso, en la concesión del crédito extraordinario o suplementario, deberán especificarse los recursos necesarios para su financiación que figurarán en los correspondientes estados de ingresos, permaneciendo equilibrados financieramente los presupuestos modificados.
- c) El Consejo de Gobierno dará trimestralmente cuenta a la Asamblea de Madrid de los créditos extraordinarios o suplementarios concedidos al amparo de la letra a) del presente apartado.

Artículo 59.⁽¹²²⁾

1. Con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá autorizar la apertura provisional de créditos en el estado de gastos de los presupuestos que tengan por objeto atender gastos inaplazables que exijan la concesión de un crédito extraordinario o suplementario, en los siguientes casos:⁽¹²³⁾

- a) Cuando la necesidad del gasto se produzca como consecuencia de catástrofes, calamidades públicas u otras situaciones de manifiesta urgencia, así declarada expresamente por el Consejo de Gobierno.
- b) Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento sea imperativo.
- c) Cuando la notificación de una sentencia judicial genere el cumplimiento de obligación de pago.

2. En el supuesto de la letra a) del apartado anterior, el Consejo de Gobierno deberá iniciar inmediatamente la tramitación del correspondiente proyecto de Ley.

En los supuestos de las letras b) y c) la apertura del crédito provisional se realizará una vez presentado el proyecto de Ley a la Asamblea.

3. Si la Asamblea de Madrid no aprobase el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o suplementario, se cancelarán los provisionales abiertos, y los ya comprometidos se aplicarán a los créditos de gasto más similares en sus fines o cuya reducción produzca menos trastornos al servicio público, oída la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid.

4. El Consejero de Hacienda podrá autorizar la concesión de créditos provisionales hasta tanto se aprueben las modificaciones presupuestarias a que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta Ley.

5. Reglamentariamente se determinará la contabilización de este tipo de créditos.

⁽¹²¹⁾ Véase art. 56 de la L.G.P.

⁽¹²²⁾ El término "crédito provisional" es equivalente al de "anticipo de Tesorería" utilizado en el artículo 60 de la L.G.P.

⁽¹²³⁾ El artículo 60 de la L.G.P. establece como límite máximo en cada ejercicio el 1 por 100 de los créditos autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los supuestos recogidos en la L.G.P. son los siguientes: "a) cuando una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado, o b) cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito".

Artículo 60. ⁽¹²⁴⁾

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de esta ley tendrán, excepcionalmente, la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y, en su virtud podrá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados o del reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de Ley.
2. Igualmente, tendrán carácter ampliable aquellos créditos que sean declarados necesarios por el Consejo de Gobierno para atender sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia.
3. Las ampliaciones de crédito podrán financiarse con mayores ingresos de los previstos inicialmente, con el remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior, con cargo al Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.
4. De las actuaciones realizadas en virtud de lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Comisión de la Asamblea de Madrid competente en materia de presupuestos.

Artículo 61.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá autorizar transferencias de crédito entre gastos corrientes y gastos de capital u operaciones financieras de diferentes Secciones, con informe previo favorable de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en cuya reunión al efecto serán oídos los portavoces de la Comisión o Comisiones afectadas. El informe deberá ser emitido dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del momento en que la Mesa y los portavoces de la Comisión consideren suficiente la documentación remitida. No obstante, en los períodos a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Asamblea el informe previo será sustituido por comunicación posterior.⁽¹²⁵⁾

Artículo 62. ⁽¹²⁶⁾

1. El Consejero de Hacienda podrá, a propuesta del Consejero respectivo, autorizar transferencias de crédito dentro de un mismo programa, o entre varios programas de una misma Sección, cualquiera que sea el Capítulo a que afecten.

Asimismo, podrá autorizar transferencias de créditos de distintas Secciones, con el siguiente alcance:

- a) Entre créditos para gastos de corrientes.
- b) Entre créditos para gastos de capital y operaciones financieras. ⁽¹²⁷⁾

⁽¹²⁴⁾ Nueva redacción dada al artículo 60 por la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 (B.O.C.M. 29-XII-2021).

⁽¹²⁵⁾ Nueva redacción dada al artículo 61 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹²⁶⁾ Véase artículo 62 de la L.G.P. Los apartados 1 y 2 del presente artículo responden a la redacción dada por la Disposición Adicional Octava de la Ley 2/1992, de 30 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, para 1992.

2. 3. ⁽¹²⁸⁾

4. Corresponde al Consejero de Hacienda autorizar, a petición del Consejero respectivo, los supuestos de modificaciones de crédito que se contemplan en los artículos 60, 65, y 67 de la presente Ley.⁽¹²⁹⁾

No obstante, la incorporación de remanentes no comprometidos de ejercicios anteriores, precisará del informe favorable de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea.

5. A propuesta del Consejero respectivo, el Consejero de Hacienda autorizará la habilitación y redistribución de los créditos derivados del proceso de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid, así como los derivados de reestructuraciones orgánicas en el seno de la misma. No obstante, en este último supuesto, será necesario el previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos y Hacienda para los créditos del Capítulo VI afectados, que se emitirá en los términos previstos en el artículo 61, apartado 1, de esta Ley.⁽¹³⁰⁾

Artículo 63.⁽¹³¹⁾

Artículo 64.

1. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones generales:

- a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias.
- c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de transferencias anteriores, hayan sido minorados.

2. Las limitaciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados en los siguientes casos:

- a) De gastos del personal.
- b) Los ocasionados por reestructuraciones orgánicas y los derivados del traspaso de funciones, servicios y competencias del Estado a la Comunidad de Madrid.
- c) Las transferencias que afecten a créditos de la Sección de Créditos Centralizados.⁽¹³²⁾
- d) Cuando sean afectados créditos de la Sección "Deuda Pública".⁽¹³³⁾

⁽¹²⁷⁾ Redacción dada al apartado 1 del art. 62 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹²⁸⁾ Apartados 2 y 3 suprimidos por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹²⁹⁾ Redacción dada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 11/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1994.

⁽¹³⁰⁾ Véase D.A. Quinta de la LPGCM para 2010.

⁽¹³¹⁾ Artículo suprimido por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹³²⁾ Redacción dada a la letra c) del art. 63.2 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹³³⁾ Apartado d) adicionado por la D.A. 15ª de la Ley 13/1994, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1995.

- e) Cuando la transferencia esté motivada por operaciones cofinanciadas o financiadas íntegramente con fondos procedentes de la Unión Europea o de cualquier otra Administración Pública, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda.⁽¹³⁴⁾
- f) Las transferencias que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.⁽¹³⁵⁾
- g) Las transferencias que afecten a créditos del fondo de contingencia.⁽¹³⁶⁾

Artículo 65.⁽¹³⁷⁾

1. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos, los ingresos efectivamente recaudados, los derechos reconocidos o compromisos de ingresos, derivados de las siguientes operaciones:

- a) Aportaciones de personas naturales o jurídicas para financiar, juntamente con la Comunidad o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprometidos en los fines u objetivos de los mismos.
- b) Enajenación de bienes de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos.
- c) Prestaciones de servicios.
- d) Activos financieros.
- e) Traspaso de competencias o servicios del Estado a la Comunidad de Madrid.
- f) Créditos para inversiones públicas que por Ley se haya dispuesto que sean así financiadas.
- g) Mayores recursos propios resultantes de la liquidación de Presupuestos de ejercicios anteriores.
- h) Las disponibilidades líquidas a que hace referencia el artículo 67 bis, apartado 3.⁽¹³⁸⁾

2. Cuando la enajenación se refiera a bienes inmuebles o activos financieros, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de capital y operaciones financieras.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles o activos financieros procedentes de herencias, legados o donaciones podrán generar crédito para gastos corrientes.⁽¹³⁹⁾

⁽¹³⁴⁾ Nueva redacción dada a este subapartado e) por la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004).

⁽¹³⁵⁾ Subapartado f) añadido por Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004).

⁽¹³⁶⁾ Letra g) añadida por Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.C.M. 30-XII-2013).

⁽¹³⁷⁾ Redacción dada a este artículo por la Ley 14/1996, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1997.

⁽¹³⁸⁾ Apartado h) del art. 65.1 añadido por la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 (B.O.C.M. 29-XII-2021).

⁽¹³⁹⁾ Redacción dada al apartado 2 por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

Artículo 66.

Los ingresos obtenidos por reintegro de pagos realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios darán lugar a reposición automática de crédito en la respectiva aplicación presupuestaria, de la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 67.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley, por decisión del Consejero de Hacienda, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente:

- a) Los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidas o autorizadas, respectivamente, en el último mes del ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante el mismo.
- b) Los créditos que amparen compromisos de gastos contraídos y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse durante el propio ejercicio.
- c) Los créditos para operaciones de capital y operaciones financieras. ⁽¹⁴⁰⁾
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados, y
- e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el artículo 65 de la presente Ley.
- f) El remanente de los créditos ampliados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60.2 de esta ley y que, por causas justificadas, no haya podido utilizarse en el ejercicio presupuestario en el que se produjo la ampliación. En este caso, la incorporación del crédito podrá financiarse con cargo al Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero. ⁽¹⁴¹⁾

2. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior únicamente podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde.

Artículo 67 bis. ⁽¹⁴²⁾

1. El Consejero competente en materia de hacienda podrá acordar que no se libren, total o parcialmente, las transferencias corrientes o de capital destinadas a los organismos autónomos y demás entidades del sector público autonómico, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades liquidas en sus Tesorerías, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.

2. Asimismo, el Consejero competente en materia de hacienda, en situaciones excepcionales y previa autorización del Consejo de Gobierno, podrá disponer la transferencia a la Tesorería General de la totalidad o parte de dichas

⁽¹⁴⁰⁾ Redacción dada a la letra c) por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 29-XII-2014, B.O.E. 26-II-2015).

⁽¹⁴¹⁾ Apartado f) del art. 67.1 añadido por la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 (B.O.C.M. 29-XII-2021).

⁽¹⁴²⁾ Artículo 67 bis añadido por la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 (B.O.C.M. 29-XII-2021).

disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta. En este supuesto, dichas disponibilidades no tendrán la consideración de recurso propio de los Organismos o entidades.

3. El importe transferido según lo dispuesto en el apartado anterior podrá generar crédito en la misma sección presupuestaria de la que proceden dichas disponibilidades o en la Sección 26 "Créditos Centralizados".⁽¹⁴³⁾

4. El Consejero competente en materia de hacienda autorizará las operaciones y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para ejecutar lo dispuesto en este artículo y dictará las disposiciones precisas para su desarrollo

SECCIÓN 3ª

Ejecución y liquidación de los Presupuestos de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos.

Artículo 68.⁽¹⁴⁴⁾

1. La gestión económica y financiera de los créditos se desarrollará reglamentariamente y se concretará sucesivamente en las siguientes fases, que comprenden el proceso del gasto:

- a) Autorización es el acto de previsión, en virtud del cual la autoridad competente acepta una propuesta para la realización del gasto, calculado de forma cierta o aproximada por exceso, reservando a tal fin el importe de la propuesta, del crédito presupuestario adecuado, habida cuenta de la finalidad y naturaleza económica del gasto.
- b) Disposición es el acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda, concierta o determina, según los casos, después de cumplir los trámites que con acuerdo a derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de actuaciones por un tercero. Con los actos de disposición o compromiso queda formalizada la reserva del crédito por un importe y condiciones exactamente determinadas.
- c) Reconocimiento de la obligación, es la operación por la que se contrae en cuentas los créditos exigibles contra la Administración comunitaria, reconociendo que ésta queda obligada frente a un tercero a cumplir una prestación dineraria.
- d) Propuesta de pago, es la operación por la que el representante autorizado del Centro gestor que ha reconocido la existencia de una obligación de pagar en favor de un tercero, solicita de la Consejería de Hacienda, o persona que tenga encomendada las funciones adscritas en el artículo 111 de la presente Ley, que, de acuerdo con la normativa vigente, realice su pago.

2. Las fases referidas en las cuatro letras del apartado anterior han de ser realizadas sin omisiones en el orden expuesto, aunque pueden ser acumuladas y emitidas en un sólo acto y un sólo documento que recoja más de una fase.⁽¹⁴⁵⁾

⁽¹⁴³⁾ Redacción dada al apartado 3 por la Ley 15/2023, de 27 de diciembre.

⁽¹⁴⁴⁾ Véase Orden de 12 de diciembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de documentos contables soporte de Operaciones sobre el Presupuesto de (§ II.3). Además, téngase en cuenta la Orden de 12 de diciembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los documentos contables soporte de operaciones extrapresupuestarias (§ II.6).

Artículo 69.

1.⁽¹⁴⁶⁾ En el ámbito del Presupuesto de la Administración de la Comunidad:

Son atribuciones del Presidente de la Comunidad y de cada Consejero, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, las operaciones correspondientes al proceso del gasto, dentro de sus respectivas competencias.

Estas mismas atribuciones corresponden a los Consejos de Administración respectivos de los Órganos de Gestión dependientes directamente de la Administración de la Comunidad, con las excepciones que puedan resultar, según las Leyes o sus Decretos de creación, de la relación de dependencia con la Consejería a la que están adscritos.

En las adquisiciones de bienes inmuebles la competencia para la autorización y disposición del gasto corresponderá al órgano competente para acordar la adquisición según lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.⁽¹⁴⁷⁾

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la autorización o compromiso del gasto estará reservado al Gobierno de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:⁽¹⁴⁸⁾⁽¹⁴⁹⁾

- a) Gastos de cuantía indeterminada.
- b) Gastos de carácter plurianual recogidos en la letra a) del artículo 55.3 o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4.
- c) Gastos corrientes, de capital y operaciones financieras que excedan de los importes fijados a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

⁽¹⁴⁵⁾ Orden de 12 de diciembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de documentos contables soporte de Operaciones sobre el Presupuesto de (§ II.3). ORDEN de 28 de enero de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de documento soporte de relación de pagos ordenados y liquidados.

⁽¹⁴⁶⁾ Nueva redacción dada al apartado 1 del art. 69 por la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 (B.O.C.M. 29-XII-2021).

⁽¹⁴⁷⁾ En el artículo 42 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001).

⁽¹⁴⁸⁾ El Acuerdo de 30 de mayo de 1996, por el que se delegan las competencias atribuidas en el artículo 69 de la L.R.H.C.M., dispone:

“Primero.

Delegar en los excelentísimos señores Consejeros y Gerentes de Organismos Autónomos la autorización de los gastos derivados de convenios o contratos, que correspondiendo al Consejo de Gobierno por razón de la cuantía o plurianualidad, sean consecuencia de prórrogas tácitas o automáticas, siempre que éstas no supongan modificación de los mismos y la autorización del gasto del convenio o contrato originario fue realizada por el Consejero o Gerente respectivo.

Segundo.

Delegar en los excelentísimos señores Consejeros y Gerentes de Organismos Autónomos la autorización de los gastos derivados de negocios jurídicos patrimoniales, que correspondiendo al Consejo de Gobierno por razón de la cuantía o plurianualidad, sean consecuencia de prórrogas o novaciones modificativas del negocio originario.”

⁽¹⁴⁹⁾ El Acuerdo de 22 de junio de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se delegan determinadas competencias en el Consejero de Educación, en materia de gastos relativos a Centros Docentes (B.O.C.M. 30-VI-2000), dice:

“Primero

Se delega en el Consejero de Educación la aprobación de los gastos que se deriven de los servicios de transporte, comedor, limpieza y seguridad de los centros docentes públicos no universitarios, cuando su cuantía sea superior a la establecida legalmente para los gastos corrientes o plurianuales que requieran la aprobación por el Consejo de Gobierno, siendo necesario, en el caso de los plurianuales, la emisión por la Consejería de Hacienda del informe previo establecido en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Segundo.

Se delega en el Consejero de Educación la aprobación de los gastos derivados de los conciertos educativos con centros docentes privados.

Tercero.

Lo dispuesto en este Acuerdo producirá efectos a partir del mismo día de la entrada en vigor del Decreto que regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios.”

No obstante, la autorización o el compromiso del gasto corresponderá al Consejero respectivo cuando el gasto se derive de la concesión de transferencias nominativas consignadas en la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid cuyo destinatario fuese alguno de los Organismos Autónomos, Entes o Entidades de Derecho público, Empresas públicas, Órganos e Instituciones de la Comunidad de Madrid.

Igualmente, corresponderá al Consejero respectivo cuando se refiera a créditos del Capítulo I del presupuesto de gastos.

- d) Gastos que se deriven de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total del precio a que se refiere el artículo 55.5 y los derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de esta Ley.
- e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y en los que el número de anualidades supere cuatro años.

Con carácter excepcional en los arrendamientos de bienes inmuebles la competencia para la autorización y disposición del gasto corresponderá al órgano competente para acordar o novar el arrendamiento según lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.⁽¹⁵⁰⁾ No obstante, en las prórrogas legales o contractuales de los contratos arrendaticios, corresponde al órgano competente en el ámbito de los programas que se les adscriben la autorización y disposición del gasto cualquiera que sea su carácter y cuantía.

En todo caso, será competencia del Consejero competente en materia de hacienda la autorización o el compromiso del gasto cuando afecte a créditos de la Sección de Deuda Pública.

2. En el ámbito de los Organismos Autónomos:

Con la misma salvedad que en el apartado anterior, compete a los Gerentes de los Organismos Autónomos de la Comunidad, en cuanto a los gastos propios de sus créditos, los actos y operaciones correspondientes a los procesos del gasto.

Corresponde al Consejo de Administración de los Órganos de Gestión dependientes de Organismos Autónomos, con las mismas salvedades que éstos, respecto a sus propios créditos, las operaciones y actos referidos al proceso del gasto. La propuesta de pago irá dirigida a quien tenga la competencia en el Organismo Autónomo de quien dependa.

Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, en la norma de creación de cada uno de ellos y con las salvedades que puedan resultar, según las Leyes, de la relación de dependencia con la Consejería u Organismo a que estén adscritos.

3. Las competencias referidas al proceso del gasto podrán delegarse en los términos previstos en las disposiciones vigentes.

4. Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en los apartados anteriores, la competencia para realizar los actos y operaciones de autorización y disposición del gasto, respecto de los contratos para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios no homologados de gestión centralizada, corresponderá al órgano centralizador, salvo la autorización cuando esté reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el

⁽¹⁵⁰⁾ Véase el artículo 46 de la citada Ley.

apartado 1 de este artículo. Los actos y operaciones de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago corresponderán a cada uno de los centros o unidades afectados por el expediente de contratación.⁽¹⁵¹⁾

Artículo 70.⁽¹⁵²⁾

La gestión económica y financiera del Presupuesto de ingresos se desarrollará reglamentariamente y se concretará sucesivamente en las siguientes fases:

- a) Compromisos de ingresos, que se considerarán aquellos recursos a que se refiere el artículo 23 de la Ley que en virtud de actos o negocios jurídicos, contratos, convenios o de disposiciones normativas, resulten a favor de la Administración de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos, y para los que el reconocimiento de los correspondientes derechos económicos suponga el cumplimiento de determinadas prestaciones, condiciones, actuaciones o que la Comunidad de Madrid esté previamente reconocida como acreedora para otra Administración Pública.
- b) El reconocimiento de un derecho económico es la operación por la que se contrae en Cuentas la deuda a favor de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos exigible a un tercero, quedando éste obligado a cumplir la prestación dineraria que se determina y siéndole de aplicación el régimen jurídico establecido en el Capítulo Primero del Título Primero de esta Ley.

Artículo 71.

1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad, el Consejero de Hacienda será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo anterior.⁽¹⁵³⁾

2. En el ámbito de los Organismos Autónomos, las competencias a que se refiere el apartado anterior corresponderán al Gerente de los mismos.⁽¹⁵⁴⁾

3. Las competencias que corresponden a las fases de ejecución del Presupuesto de Ingresos podrán delegarse en los términos previstos en las disposiciones vigentes.

Artículo 72.

La expedición de órdenes de pago con cargo al Presupuesto de la Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos habrá de acomodarse al plan general que sobre disposición de fondos de la Tesorería se

⁽¹⁵¹⁾ Nueva redacción del apartado 4 dada por el artículo 7.Cinco de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30-XII-2008). Téngase en cuenta la Orden de 27 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se determinan los suministros y servicios de gestión centralizada y los procedimientos para su contratación (B.O.C.M. 10-VIII-2020). Véase el artículo 35 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

⁽¹⁵²⁾ Véase Orden de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprueban los modelos de documentos contables soporte de operaciones sobre el presupuesto de ingresos (§ II.5). Téngase en cuenta, además, la Orden de 12 de diciembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueban los modelos de documentos contables soporte de las operaciones extrapresupuestarias.(§ II.6).

⁽¹⁵³⁾ Véase Orden de 3 de diciembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el Protectorado de Fundaciones (B.O.C.M. 21-XII-2021), cuyo artículo sexto, establece: "Se delega en el titular de la Dirección General de Tributos, sin perjuicio de lo previsto con carácter general respecto de los titulares de los centros directivos, el ejercicio de las siguientes competencias: a) Las competencias de ejecución del presupuesto de ingresos previstas en el artículo 71.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid."

⁽¹⁵⁴⁾ El apartado 2 de este artículo responde a la redacción dada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 11/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1994.

establezca por el Consejero de Hacienda. Este plan podrá ser revisado a lo largo del ejercicio en función de las disponibilidades efectivas o previstas de la Tesorería.⁽¹⁵⁵⁾

Artículo 73.

Previamente al reconocimiento de las obligaciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.⁽¹⁵⁶⁾

No obstante, y de acuerdo con las instrucciones que dicte el Consejero de Hacienda, podrá eximirse este requisito, sin perjuicio de su posterior acreditación, en aquellos casos en que por imperativos de normas de obligado cumplimiento no resulte posible su exigencia.

Artículo 74.⁽¹⁵⁷⁾

1. Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo anterior.

2. Procederá la expedición de pagos a justificar en los supuestos siguientes:

- a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago.
- b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar en territorio extranjero.
- c) Cuando por razones de oportunidad, u otras debidamente ponderadas, se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.
- d) Cuando se den los supuestos de tramitación de emergencia a que hace referencia el artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.⁽¹⁵⁸⁾

3. El Consejero de Hacienda establecerá las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija con cargo a los respectivos presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables⁽¹⁵⁹⁾.

4. Los perceptores de este tipo de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetas al régimen de responsabilidades previsto en la presente Ley. El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en

⁽¹⁵⁵⁾ Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo y el 109 de esta Ley, anualmente se aprueba y publica el Plan de Disposición de Fondos. Véase Orden de 5 de enero de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establece el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para el año 2022. (B.O.C.M. 20-I-2022).

⁽¹⁵⁶⁾ La "regla del servicio hecho" aparece reflejada en el artículo 39 de esta Ley, artículo 198.1 y 3 de la L.C.S.P y artículo 10 de la Ley de subvenciones (§ IV.1).

⁽¹⁵⁷⁾ Véase Orden de 9 de marzo de 2005, reguladora de los pagos a justificar y los anticipos de caja fija, (B.O.C.M. 17-III-2005) (§ II.2).

⁽¹⁵⁸⁾ Letra añadida por la Ley 28/1997, de 26 de diciembre de 1997, de Medidas Fiscales y Administrativas. La referencia debe entenderse al artículo 120 de la L.C.S.P.

⁽¹⁵⁹⁾ En desarrollo de este apartado se han dictado las órdenes reseñadas en nota al artículo 74 y la Orden 1398/1991, de 8 de mayo, por la que se regulan los pagos domiciliados y la realización de los pagos periódicos y repetitivos (§ II.4).

el plazo de seis meses. El Tesorero General podrá, excepcionalmente, ampliar estos plazos a seis y doce meses, respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito.

5. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente.

6. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, según previene el artículo 57 de esta Ley.

7. Tendrán la condición de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter permanente que se realicen a Cajas Pagadoras para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, tales como dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.

Estos anticipos de caja fija tendrán la consideración de operaciones extrapresupuestarias.

Las unidades administrativas responsables de estos fondos justificarán su aplicación o situación conforme se establezca reglamentariamente y tales fondos formarán parte de la Tesorería.⁽¹⁶⁰⁾

8. Semestralmente se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid de las autorizaciones concedidas en base al presente artículo.

Artículo 75.⁽¹⁶¹⁾ ⁽¹⁶²⁾

1. Las ayudas públicas que se concedan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad lo serán con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión.

2. Se regulará mediante Ley el régimen económico-financiero de las subvenciones públicas estableciendo en todo caso su sometimiento a los criterios especificados en el párrafo anterior y determinando las obligaciones de los distintos sujetos partícipes, su régimen de control y de las infracciones y sanciones administrativas.⁽¹⁶³⁾

3. Para las restantes ayudas públicas les será de aplicación lo establecido en su correspondiente legislación específica, y supletoriamente el régimen económico-financiero que se establezca para las subvenciones.

4. Las ayudas públicas de carácter no condicionado se regirán con el mismo régimen económico-financiero, siendo de aplicación general todas aquellas materias que, por su naturaleza, no deriven del carácter finalista de dichas ayudas.

En particular para las transferencias será de aplicación idéntica regulación que para las subvenciones en los siguientes aspectos:

⁽¹⁶⁰⁾ Apartado 7 modificado por el artículo 6 de la Ley 14/2001, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 28-XII-2001).

⁽¹⁶¹⁾ Véase la Ley 2/1995, de 18 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid (§ IV.1) y el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas (§ IV.2).

⁽¹⁶²⁾ Redacción dada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid (§ IV.1).

⁽¹⁶³⁾ La regulación de las Subvenciones de la Comunidad de Madrid se hizo mediante la Ley 2/1995, de 8 de marzo (§ IV.1). Téngase en cuenta, además, que determinados artículos de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del R.D. 887/2006, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley de Subvenciones, tienen carácter básico.

- a) Principios generales.
- b) Definición, competencias y obligaciones de los sujetos participantes.
- c) Régimen de intervención y contabilidad en lo que se refiere a la concesión y al pago.
- d) Reintegros por incumplimiento de requisitos base de la concesión.
- e) Infracciones y sanciones administrativas.

5. La Consejería de Hacienda remitirá trimestralmente a la Asamblea la relación de ayudas públicas que se concedan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, con expresión de la entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la ayuda indicando además la fecha y el número del Boletín Oficial en el que se hayan publicado.

Asimismo se enviará con dicha periodicidad copia de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones.

6. El Consejo de Gobierno, en los términos que acuerde, deberá proceder a la revisión del gasto público en subvenciones y ayudas, el cumplimiento de los objetivos perseguidos y el análisis de los resultados obtenidos, a través de medios propios o mediante colaboración con otras organizaciones y entidades externas independientes, tales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.⁽¹⁶⁴⁾

Artículo 76.⁽¹⁶⁵⁾

1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el treinta y uno de diciembre del año natural correspondiente.

2. Todos los derechos reconocidos y pendientes de cobro, así como las obligaciones reconocidas pendientes de pago a la liquidación de los Presupuestos quedarán a cargo de la Tesorería según sus respectivas contracciones.

3. Los ingresos que se realicen una vez cerrado el respectivo presupuesto quedarán desafectados del destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido, sin perjuicio de su reconocimiento y nueva afectación con cargo al presupuesto del ejercicio en curso.

Artículo 77.

Los compromisos de ingreso que al cierre del ejercicio estuvieran pendientes de reconocer los correspondientes derechos económicos se trasladarán al inmediato siguiente, contabilizándose de forma separada a la ejecución de las nuevas previsiones presupuestarias.

⁽¹⁶⁴⁾ Apartado introducido por el artículo 1 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

⁽¹⁶⁵⁾ Véase artículo 45 de la presente Ley.

Artículo 78.

Practicada la liquidación de cada uno de los Presupuestos integrantes de los Generales de la Comunidad se determinará el Resultado, así como los remanentes del ejercicio que tendrán la consideración de recursos propios.

CAPÍTULO II **Presupuestos de las Empresas y Entes Públicos⁽¹⁶⁶⁾**

Artículo 79.⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾

- 1.** Las Empresas y Entes Públicos a que se refieren los artículos 5 y 6 de esta Ley cuya normativa específica no confiera carácter limitativo a sus estados de gastos, elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y un presupuesto de capital en la forma y con el contenido que determine la Orden referida en el artículo 48 de la presente Ley.
- 2.** Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Flujos de Efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará la conversión a presupuesto administrativo de los mismos, una previsión del Balance de la entidad, una memoria explicativa del contenido de dichos presupuestos así como la documentación complementaria que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.
- 3.** Las Empresas y Entes Públicos remitirán los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de a la previsión para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, a la liquidación del último ejercicio cerrado y a la estimación de la liquidación del ejercicio corriente.
- 4.** Junto con los presupuestos de explotación y capital se remitirá por las Empresas y Entes Públicos una memoria de la evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio así como la expresión de los objetivos a alcanzar en el mismo.
- 5.** Si las Empresas y Entes Públicos perciben transferencias u otras aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, las variaciones en sus presupuestos de explotación y capital que no afecten a las transferencias o aportaciones serán autorizadas por el Consejero competente en materia de Hacienda cuando su importe no exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto, y por el Consejo de Gobierno en los demás casos.
- 6.** Los Organismos Autónomos mercantiles solo podrán incrementar la cifra total que dediquen a la financiación de cada Empresa en que participen un 5 por 100. En los demás casos se requerirá autorización del Consejo de Gobierno.

⁽¹⁶⁶⁾ Nueva denominación del capítulo dada por el artículo 7. Seis de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30-XII-2008).

⁽¹⁶⁷⁾ Nueva redacción del artículo 79 dada por el artículo 7. Siete de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30-XII-2008).

⁽¹⁶⁸⁾ Por Orden de 13 de febrero de 2024, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se establecen los procedimientos para la tramitación de determinadas modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre el presupuesto en el ejercicio 2024 (B.O.C.M. 20-II-2024).



7. Las Empresas y Entes Públicos que deban elaborar los presupuestos de explotación y capital regulados en el presente artículo, formularán, asimismo, anualmente un Plan Estratégico empresarial para un período mínimo de cuatro años.

Artículo 80.

Las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad, dictadas para cada ejercicio por el Consejero de Economía y Hacienda, fijarán el plazo límite para que las Empresas y Entes Públicos remitan, a través de la Consejería correspondiente, la documentación a que se refiere el artículo 79 de la presente Ley.⁽¹⁶⁹⁾

Artículo 81.⁽¹⁷⁰⁾

1. En los supuestos en que se estipulen convenios con la Administración de la Comunidad o la de sus Organismos Autónomos, tanto por las Empresas Públicas como por las demás que reciban transferencias con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, se incluirán, en cualquier caso, las cláusulas correspondientes a las siguientes materias:

- a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base al acuerdo.
- b) Objetivos de la política de personal, rentabilidad, productividad o reestructuración técnica de la explotación económica, así como métodos de evaluación de aquéllos.
- c) Transferencias de la Administración de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos.
- d) Medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones habidas en el respectivo entorno económico.
- e) Control por la Consejería de Hacienda de la ejecución del convenio y posterior explotación económica.

2. Los convenios que se celebren entre la Comunidad de Madrid y otras Administraciones Públicas, se remitirán a la Asamblea con carácter informativo.⁽¹⁷¹⁾

⁽¹⁶⁹⁾ Nueva redacción del artículo 80 dada por el artículo 7.Ocho de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30-XII-2008).

⁽¹⁷⁰⁾ Véase el artículo 61 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid (§ 1.7) y art. 39.2 de esta Ley.

⁽¹⁷¹⁾ Apartado modificado por la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 2-I-1998). Respecto de la regulación de la actividad convencional, véase el Acuerdo de 16 de julio de 2003, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban criterios de coordinación de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid (§ II.9).

TÍTULO III DE LA INTERVENCIÓN

CAPÍTULO I

La Intervención de la Administración de la Comunidad

Artículo 82.

Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Comunidad de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en sus disposiciones complementarias.

Artículo 83.⁽¹⁷²⁾

1. La función a que se refiere el artículo 16 de esta Ley se ejercerá en sus modalidades de intervención crítica o fiscalización, formal y material, con la extensión y los efectos que se determinan en esta Ley y en las demás disposiciones de aplicación.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

- a) La intervención previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.⁽¹⁷³⁾
- b) La intervención formal de la ordenación del pago.
- c) La intervención material del pago.
- d) La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones o servicios, que comprenderá el examen documental.⁽¹⁷⁴⁾

3. Son inherentes a la función interventora las siguientes competencias:

- a) Intervenir la liquidación de los presupuestos a que se refiere el artículo 79.1 de esta Ley.⁽¹⁷⁵⁾
- b) Interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes.
- c) Recabar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deban ser intervenidos lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de esta función.

⁽¹⁷²⁾ Véase Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

⁽¹⁷³⁾ Decreto 62/2021, de 21 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de intervención previa de requisitos esenciales en la Comunidad de Madrid (§ V.2).

⁽¹⁷⁴⁾ Véase la Circular 1/1998, de 26 de enero, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones sobre el ejercicio de la Función Fiscalizadora (§ V.7).

⁽¹⁷⁵⁾ Nueva redacción de la letra a) del apartado 3 dada por el artículo 7.Nueve de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30-XII-2008).

4. No estarán sometidas a intervención previa las subvenciones con asignación nominativa en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, los contratos menores, así como otros gastos menores de 5.000 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.⁽¹⁷⁶⁾

Artículo 84.

1. Por la vía reglamentaria se establecerá la competencia de los Interventores-Delegados y del Interventor General de la Comunidad.⁽¹⁷⁷⁾

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Interventor General podrá avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno.

Artículo 85.

1. Podrá sustituirse la intervención previa por un control financiero de carácter permanente, para aquellos gastos que por vía reglamentaria se determinen.⁽¹⁷⁸⁾

2. El Consejo de Gobierno podrá acordar, previo informe de la Intervención General de la Comunidad, que la intervención previa en cada una de las Consejerías, Centros, Dependencias y Organismos se limite a comprobar los extremos siguientes:

- a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 55 de esta Ley.

- b) Que las obligaciones o gastos se generan por órganos competentes.
- c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación respecto de las obligaciones o gastos de cuantía indeterminada y aquellos otros que deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

⁽¹⁷⁶⁾ Apartado 4 modificado por el artículo 6 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 28-XII-2001). En relación a la exención de intervención véase el artículo 19 del Decreto 45/1997 por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General (§ V.3) y la Instrucción 4ª de la Circular 1/1998, por la que se dictan instrucciones sobre el ejercicio de la función fiscalizadora (§ V.7).

⁽¹⁷⁷⁾ Véase artículo 8 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3). Decreto 250/2023, de 15 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se adaptan las intervenciones delegadas al número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. (B.O.C.M. de 17-XI-2023).

⁽¹⁷⁸⁾ Véase artículo 32 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3). Por Decreto 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de ayudas o subvenciones efectuado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid como consecuencia del COVID-19 (B.O.C.M. 2-IV-2020). Por Decreto 64/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de las ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado (Líneas COVID) (B.O.C.M. 29-IV-2021).

4. Por el Consejo de Gobierno se determinará el modelo de control posterior a ejercer por la Intervención General para las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, y que necesariamente consistirá en un control financiero permanente o bien en una fiscalización plena.

- a) Cuando se trate de fiscalización plena, se ejercerá sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
- b) En caso de ejercicio del control financiero permanente se estará a lo dispuesto en las normas sobre técnicas y procedimientos de auditoría, determinándose por la Intervención General las instrucciones sobre su aplicación y operatividad.

5. Por la Intervención General, o Delegadas en su caso, se emitirá informe escrito, en cualquiera de los supuestos anteriores, en el que se harán constar las observaciones y conclusiones que se deduzcan del control practicado y se remitirán al Consejo respectivo para que formule, si procede, las alegaciones que considere oportunas.

Del conjunto de los informes anteriores, por la Intervención General se dará cuenta al Consejo de Gobierno y a los Centros directivos que resulten afectados, de los resultados más importantes del control practicado y, en su caso, propondrá las actuaciones que sean aconsejables para asegurar que la administración de los recursos públicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

6. La fiscalización previa de los derechos y de los movimientos internos de fondos será sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General de la Comunidad.⁽¹⁷⁹⁾

Artículo 86.

1. Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, deberá formular sus reparos por escrito, exponiendo los motivos del mismo y en el plazo que reglamentariamente se determine.⁽¹⁸⁰⁾

2. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento de derechos a favor de la Hacienda de la Comunidad, la oposición se formalizará en nota de reparo, y de subsistir la discrepancia, mediante la interposición de los recursos o reclamaciones que procedan.

Artículo 87.

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones o realización de pagos, la tramitación del expediente se suspenderá hasta que sea solventado dicho reparo en los siguientes casos:

- a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.

⁽¹⁷⁹⁾ Véase artículos 12 y 13 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3). El artículo 11.6 del mismo dispone que los actos de devolución de ingresos indebidos tendrán a efectos de fiscalización previa la consideración de gasto y pago presupuestario.

⁽¹⁸⁰⁾ Véase artículo 16 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

- b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
- c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que sean esenciales, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Comunidad o a un tercero.
- d) Cuando el reparo derivase de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Artículo 88.⁽¹⁸¹⁾

1. Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:

- a) En los casos en que haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General de la Comunidad conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.
- b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o ésta haya confirmado el de una Intervención Delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Gobierno adoptar resolución definitiva.

2. La Intervención podrá emitir informe favorable no obstante los defectos que observe en el respectivo expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de aquéllos, de la que se dará cuenta a dicha Intervención.

CAPÍTULO II

La Intervención de los Organismos Autónomos de la Comunidad

Artículo 89.⁽¹⁸²⁾

1. Las disposiciones contenidas en el Capítulo I del presente Título serán de aplicación a la intervención en los Organismos Autónomos administrativos.

2. En sustitución de la función interventora regulada en el Capítulo I del presente Título, los Organismos Autónomos mercantiles quedan sometidos al control financiero a que se refiere el artículo 17 de esta Ley. Dicho control financiero se ejercerá con carácter permanente respecto de la totalidad de operaciones efectuadas por los citados Organismos Autónomos, mediante procedimiento de auditoría.⁽¹⁸³⁾

⁽¹⁸¹⁾ Véase artículo 8 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

⁽¹⁸²⁾ El artículo 35 de la Ley 1/1984, de 19 de enero reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, ha de entenderse sustituido por lo dispuesto en el presente artículo.

⁽¹⁸³⁾ Véase artículo 32 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

TÍTULO IV DEL ENDEUDAMIENTO Y LOS AVALES

CAPÍTULO I Del Endeudamiento⁽¹⁸⁴⁾

Artículo 90.⁽¹⁸⁵⁾

1. Constituyen el endeudamiento de la Comunidad las operaciones financieras realizadas por plazo superior a un año que adopten algunas de las siguientes modalidades:

- a) Operaciones de crédito concertadas con personas físicas o jurídicas.
- b) Empréstitos, emitidos para suscripción pública en el mercado de capitales y representados en títulos-valores o anotaciones en cuenta.
- c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado ⁽¹⁸⁶⁾.

2. Las operaciones de crédito concertadas a un plazo superior a doce meses, deberán cumplir los requisitos siguientes:⁽¹⁸⁷⁾

- a) Su importe se destinará exclusivamente a financiar gastos de inversión.
- b) La cuantía de las anualidades, incluyendo los intereses y la amortización, no excederán del 25 por 100 de los ingresos corrientes de la Hacienda previstos en los Presupuestos de cada año.

3. La creación del endeudamiento, recogido en el apartado 1, habrá de ser autorizado por Ley, que, sin perjuicio de fijar cualquier otra característica, deberá señalar el importe máximo autorizado. Dicha autorización tendrá vigencia hasta tanto finalice la realización de los gastos correspondientes.⁽¹⁸⁸⁾

4. Corresponde al Consejo de Gobierno disponer la realización de las operaciones financieras en los ámbitos nacional y extranjero para financiar los gastos de inversión, así como acordar operaciones de refinanciación e intercambio financiero relativas a operaciones de crédito por plazo superior a un año, para obtener un mejor coste o una mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado.

5. El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos conexos de las operaciones financieras se aplicarán al respectivo Presupuesto.

⁽¹⁸⁴⁾ Véase lo dispuesto en esta materia en artículo 55 del E.A. (§ I.2).

⁽¹⁸⁵⁾ Véanse arts. 92 y siguientes de la L.G.P.

⁽¹⁸⁶⁾ Redacción dada al apartado 1 del art. 90 por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

⁽¹⁸⁷⁾ Véase art. 14.2 L.O.F.C.A. (§ VI.1).

⁽¹⁸⁸⁾ Redacción dada por la Disposición Adicional Octava de la Ley 8/1992, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1993.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, el producto de las operaciones financieras, así como sus amortizaciones, se podrán contabilizar transitoriamente en una cuenta de Operaciones de la Tesorería, traspasándose el Presupuesto de la Comunidad por su saldo neto al cierre del ejercicio. Los gastos por intereses y por conceptos conexos de las referidas operaciones seguirán el régimen general previsto en el apartado 5 de este artículo.

Artículo 91.

1. Las operaciones de endeudamiento que la Comunidad realice por plazo no superior a un año tendrán por objeto financiar las necesidades transitorias de Tesorería.⁽¹⁸⁹⁾

2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas y demás Entes que se clasifiquen en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, y el resto de Organismos Autónomos, Entidades públicas empresariales, Sociedades Mercantiles y demás Entes de Derecho público dependientes de la Comunidad de Madrid, incluidas en el subsector sociedades no financieras públicas, podrán realizar operaciones de crédito a lo largo del ejercicio, en coordinación con la ejecución de la política financiera y del régimen que para las operaciones de carácter económico y financiero establezca la Consejería competente en materia de Hacienda.⁽¹⁹⁰⁾

Artículo 92.

1. Las operaciones de crédito concertadas con personas físicas o jurídicas y los Empréstitos emitidos por la Comunidad, con plazos de reembolso superior a un año, deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente.

2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas y demás Entes que se clasifiquen en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, y el resto de Organismos Autónomos, Entidades públicas empresariales, Sociedades Mercantiles y demás Entes de Derecho público dependientes de la Comunidad de Madrid, incluidas en el subsector sociedades no financieras públicas, necesitarán autorización expresa de la Consejería competente en materia de Hacienda para realizar operaciones financieras con plazo de reembolso superior a un año. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad fijará el límite de estas operaciones.⁽¹⁹¹⁾

⁽¹⁸⁹⁾ Redacción dada al apartado 1 del artículo 91 por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Véase también artículo 14.1 L.O.F.C.A. (§ VI.1).

⁽¹⁹⁰⁾ Nueva redacción dada al apartado 2 del artículo 91 por Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.C.M. 30-XII-2013, c.e. B.O.C.M. 21-I-14 y 27-III-14, BOE 26-III-2014). La Orden de 12 de marzo de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda (B.O.C.M. 27-III-2014), regula el procedimiento de autorización y seguimiento de las operaciones financieras concertadas por las Universidades Públicas de Madrid, por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid integrados en el sector público atendiendo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

⁽¹⁹¹⁾ Redacción dada al apartado 2 del artículo 92 por Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2013, c.e. B.O.C.M. 21-I-14 y 27-III-14, BOE 26-III-2014). Véase también la nota al artículo 91.2.

Artículo 93.⁽¹⁹²⁾

1. Los Empréstitos podrán estar representados en anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente los reconozca.
2. Sólo será preceptiva la intervención de fedatario público cuando así lo disponga expresamente la legislación aplicable. No será preceptiva, en todo caso, para las operaciones con pagarés, operaciones privadas de crédito, y aquellas otras en las que los títulos-valores se extingan por su transformación en anotaciones en cuenta.
3. Los títulos que emita la Comunidad gozan de los mismos beneficios y condiciones que los de la Deuda del Estado.

Artículo 94.⁽¹⁹³⁾

Los Empréstitos podrán estar denominados en pesetas o en moneda extranjera, emitirse tanto en el interior como en el exterior y reunir las características de plazo, tipo de interés, representación o cualesquiera otras que permitan una reducción de su coste y una mejor adecuación a los fines perseguidos con su creación. Su adquisición, tenencia y negociación no estará sujeta a más limitaciones que las derivadas de las propias normas de creación, de las reguladoras de los mercados en que se negocia o de las normas vigentes en materia de control de cambios.

Artículo 95.⁽¹⁹⁴⁾

Con las limitaciones que deriven de lo previsto en los apartados 2, 3 y 6 del artículo 90, se faculta al Consejero de Hacienda a:

1. Proceder a la emisión o contratación de operaciones de crédito y Empréstitos estableciendo su representación, voluntaria o exclusiva en anotaciones en cuenta, títulos-valores u otro documento que formalmente lo reconozca, determinar sus condiciones, y formalizar en representación de la Comunidad tales operaciones.
2. Recurrir, para la colocación de las emisiones de valores negociables, a cualquier técnica que no entrañe una desigualdad de oportunidades para los potenciales adquirentes de los mismos, según su naturaleza y funciones.

En particular podrá:

- a) Ceder la emisión, durante un período prefijado de suscripción a un precio único preestablecido.
- b) Subastar la emisión, adjudicando los valores conforme a reglas que se harán públicas con anterioridad a la celebración de la subasta.
- c) Vender la emisión, a lo largo de un plazo abierto, directamente en Bolsa y, en el caso de los valores materializados, en anotaciones en cuenta, en el correspondiente mercado de deuda.

⁽¹⁹²⁾ Véase art. 103.1 y 104.2 de la L.G.P.

⁽¹⁹³⁾ Véase art. 104 de la L.G.P.

⁽¹⁹⁴⁾ Véase art. 102 de la L.G.P.

- d) Subastar la emisión entre el público en general, entre colocadores autorizados o entre un grupo restringido de éstos que adquieran compromisos especiales respecto a la colocación de la deuda o al funcionamiento de sus mercados.
 - e) Ceder parte o la totalidad de una emisión a uno o varios agentes colocadores a un precio convenido, con destino a su mantenimiento en la cartera o a la ulterior negociación. En todo caso, la colocación de una emisión podrá fragmentarse en el tiempo, así como en su cuantía, colocándose los distintos fragmentos conforme a técnicas de emisión diversas y, en el caso de emisiones fragmentadas en el tiempo, a precios distintos.
3. Adquirir en el mercado secundario valores negociables con destino a su amortización o proceder, por mutuo acuerdo con los acreedores, según lo establecido en las cláusulas contractuales, al reembolso anticipado, incluso parcial, o a la revisión de alguna de sus condiciones, cuando la situación del mercado u otras circunstancias así lo aconsejen.
 4. Acordar o concertar operaciones voluntarias de amortización, canje, conversión, prórroga, intercambio financiero, cambio en la forma de representación y otras análogas que supongan modificaciones de cualesquiera condiciones de las operaciones realizadas, en el marco de las leyes de creación, y según lo estipulado en sus respectivos contratos.
 5. Acordar cambios en las condiciones de los Empréstitos y operaciones de crédito que obedezcan exclusivamente a su mejor administración, siempre que no se perjudiquen los derechos económicos de terceros.
 6. Convenir, en las operaciones de endeudamiento, las cláusulas y condiciones usuales en estas operaciones.
 7. Habilitar en Programas de la Consejería de Hacienda y de los Organismos Autónomos, los créditos necesarios para hacer frente a los reembolsos contractuales o anticipados de las operaciones que integran el endeudamiento de la Comunidad.
 8. Encomendar el ejercicio de las competencias señaladas en los apartados anteriores en relación al endeudamiento de los Organismos Autónomos, a sus correspondientes órganos rectores.
 9. Disponer la emisión durante el mes de enero de cada año, con sujeción a las normas reguladoras de las emisiones de similares características dictadas en desarrollo de la autorización de creación de endeudamiento contenida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año precedente. Estas emisiones no sobrepasarán, en ningún caso, el 15 por 100 del límite autorizado para este último año y se computarán dentro del límite autorizado para el año en curso por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.

Artículo 96.⁽¹⁹⁵⁾

1. Los capitales de los Empréstitos prescribirán cuando transcurran 20 años sin percibir sus intereses, ni realizar sus titulares acto alguno que suponga o implique el ejercicio de su derecho ante la Administración de la Hacienda de la Comunidad.

⁽¹⁹⁵⁾ Véase art. 105 de la L.G.P.

2. La obligación de reembolso de los capitales llamados a conversión prescribirá a los 10 años, contados desde el último día del plazo establecido para la operación o, en su caso, desde que los nuevos valores pudieran ser retirados en lugar de los presentados a la conversión.

3. Prescribirá a los 5 años la obligación de pagar los intereses y de devolver los capitales llamados a reembolso, contados, respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso.

CAPÍTULO II

De los Avales de la Comunidad

Artículo 97.⁽¹⁹⁶⁾

La Comunidad podrá, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, afianzar las obligaciones derivadas de créditos concertados en el interior o en el exterior por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, mediante el otorgamiento del correspondiente aval. Los acuerdos de autorización deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 98.⁽¹⁹⁷⁾

1. A propuesta del Consejero de Hacienda, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de avales y garantías a las operaciones crediticias de medio y largo plazo que realicen los Organismos Autónomos, Entes Públicos y Empresas dependientes de la Comunidad, por el importe máximo de las operaciones de crédito autorizadas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. La misma autorización se requerirá para el otorgamiento de avales de la Comunidad en garantía de operaciones de refinanciación de créditos, y de créditos de plazo no superior a un año.

Artículo 99.

La autorización del Consejo de Gobierno citada en el artículo anterior, podrá referirse específicamente a cada operación, o comprender varias de ellas con determinación, en todo caso, de la identidad de los avalados, del plazo dentro del cual deberán ser otorgados los avales, y de su importe máximo, individual o global. En dicho importe máximo se considerarán incluidos la totalidad de los gastos derivados de la operación.⁽¹⁹⁸⁾

⁽¹⁹⁶⁾ Véase art. 113 de la L.G.P.

⁽¹⁹⁷⁾ Véase art. 114.2 de la L.G.P.

⁽¹⁹⁸⁾ Artículo modificado por la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de 1997, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 2-I-1998).



Artículo 100.⁽¹⁹⁹⁾

El otorgamiento de avales por la Comunidad, en los casos no previstos en los anteriores artículos, deberá ser autorizado por medio de la correspondiente Ley, que deberá contener, al menos, las determinaciones contempladas en el artículo 98 anterior.

Artículo 101.⁽²⁰⁰⁾

En los avales otorgados por la Comunidad, regulados en el artículo 98 y dentro de los límites en él establecidos, el Consejero de Hacienda podrá convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros.

En particular, podrá acordar:

- a) La renuncia al beneficio de excusión que establece el artículo 1.830 del Código Civil.
- b) Excepcionalmente, en los avales que garanticen operaciones de crédito exterior, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o a tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley.

Artículo 102.⁽²⁰¹⁾

Los avales otorgados por la Comunidad podrán devengar las comisiones que para cada operación se determine.

Artículo 103.

La Consejería de Hacienda podrá inspeccionar las operaciones o inversiones financiadas con créditos avalados por la Comunidad, para comprobar su aplicación y rentabilidad, dando cuenta de los resultados de la referida inspección a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea.

TÍTULO V DE LA TESORERÍA

Artículo 104.⁽²⁰²⁾

Constituyen la Tesorería de la Comunidad de Madrid todos los recursos financieros ya sean dinero, valores o créditos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.

⁽¹⁹⁹⁾ Véase art. 114.1 de la L.G.P.

⁽²⁰⁰⁾ Véase art. 116 de la L.G.P.

⁽²⁰¹⁾ Véase art. 117 de la L.G.P.

⁽²⁰²⁾ Véase art. 90 de la L.G.P.

Artículo 105.

Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad pública.

Artículo 106.⁽²⁰³⁾

Son funciones encomendadas a la Tesorería:

- a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Comunidad.⁽²⁰⁴⁾
- b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
- c) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones de la Comunidad.⁽²⁰⁵⁾
- d) Responder de los avales contraídos por la Comunidad según las disposiciones de esta Ley.
- e) Tramitar y proponer al Consejero de Hacienda la resolución de los expedientes relativos a la extinción de recursos y obligaciones de la Comunidad.
- f) Negociar el pago con acreedores y entidades financieras por las obligaciones reconocidas, con objeto de obtener una mayor eficacia en la gestión.
- g) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.

Artículo 107.⁽²⁰⁶⁾

1. La Tesorería situará los fondos públicos en el Banco de España y en las entidades financieras, que operan en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Excepcionalmente, y en aquellos casos en que las condiciones de mercado así lo aconsejen, la Tesorería podrá situar sus fondos en entidades financieras que operen en territorio distinto al de la Comunidad de Madrid.

2. El Consejero de Hacienda podrá suscribir convenios con las entidades financieras, tendentes a determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas en que se encuentran situados los fondos de la Tesorería.

3. Trimestralmente, la Consejería de Hacienda remitirá a la Asamblea la información correspondiente al estado de los recursos financieros que constituyen la Tesorería de la Comunidad.

⁽²⁰³⁾ Véase art. 91 de la L.G.P.

²⁰⁴ La Orden 398/1986, de 16 de abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, fija el régimen de admisión de ingresos y pagos en las Cajas Central y Auxiliares de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 22-IV-1986).

⁽²⁰⁵⁾ Véase nota al artículo 72 de esta Ley.

⁽²⁰⁶⁾ Véanse artículos 108 y 109 de la L.G.P.

Artículo 108.⁽²⁰⁷⁾

1. El Consejero de Hacienda, en relación con las cuentas abiertas en entidades de crédito a las que se refiere el artículo anterior, podrá recabar del Órgano administrativo gestor, del Organismo Autónomo titular y de la correspondiente entidad de crédito, cualesquiera datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó la apertura de la cuenta.
2. Asimismo, el Consejero de Hacienda podrá ordenar la cancelación de las cuentas abiertas en entidades financieras a las que se refiere el artículo anterior, o paralizar su utilización cuando se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura o que no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.

Artículo 109.

1. Los fondos de los Organismos Autónomos y de los Entes y Empresas Públicas a que se refiere el apartado 5 del artículo 111, se situarán en la Tesorería de la Comunidad de Madrid contablemente diferenciados.⁽²⁰⁸⁾
2. En cumplimiento del principio de Unidad de Caja y bajo la dependencia de la Tesorería General, las Tesorerías propias de los Organismos Autónomos se someterán en su régimen de funcionamiento a las disposiciones que adopte el Consejero de Hacienda.
3. Los Organismos Autónomos de la Comunidad podrán utilizar los servicios de las entidades financieras señaladas en el artículo 107, previa autorización de la Tesorería General, y conforme a las disposiciones que se dicten al efecto por el Consejero de Hacienda.
4. El Consejero de Hacienda podrá dictar disposiciones para el funcionamiento de la Tesorería de los Entes y Empresas Públicas.⁽²⁰⁹⁾
5. La Tesorería de la Comunidad de Madrid ejercerá como Caja de Depósitos y Fianzas para la Comunidad de Madrid. A tal efecto el Consejero de Hacienda dictará las instrucciones necesarias para su funcionamiento y en especial en cuanto a la centralización de los depósitos efectuados ante los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid.^{(210) (211) (212)}

⁽²⁰⁷⁾ Véase art. 109.4 de la L.G.P.

⁽²⁰⁸⁾ Redacción dada a este apartado por Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004).

²⁰⁹ La Orden de 10 de octubre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, regula la remisión del Plan Anual de Tesorería de Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comunidad de Madrid a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería (B.O.C.M. 28-X-2016).

⁽²¹⁰⁾ Apartado añadido por la Disposición Adicional Octava de la Ley 8/1992, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1993.

⁽²¹¹⁾ Véase art. 67 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y el art. 23 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, que dispone que las garantías que de conformidad con las disposiciones de la L.C.S.P. se exijan en los contratos que celebren los órganos de contratación, se depositarán indistintamente, cuando este requisito sea preceptivo, en la Tesorería del Organismo Autónomo, en su caso, o en la Tesorería de la Comunidad de Madrid o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

El artículo 1 del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero de 1997, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos establece:

“Artículo 1. Ámbito

1. *Se presentarán ante la Caja de garantías que deban constituirse a favor de:*

- b) Otras Administraciones públicas, territoriales o no, siempre que así se prevea mediante convenio entre la Administración General del Estado y la Administración correspondiente.”*

6. Excepcionalmente, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid podrá disponer y aplicar los excedentes de tesorería de Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, cuando las necesidades de liquidez así lo requieran, y previa autorización del Consejo de Gobierno. ⁽²¹³⁾

Artículo 110.⁽²¹⁴⁾

1. Los ingresos a favor de la Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, en las cajas de la Tesorería y en las entidades financieras, mediante dinero efectivo, giros, transferencias, cheques, domiciliaciones bancarias y cualquier otro medio o documento de pago legalmente admisible.

2. La Tesorería podrá asimismo, pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que hace referencia el apartado anterior⁽²¹⁵⁾.

Artículo 111.⁽²¹⁶⁾

1. El proceso de pago comprende las siguientes fases sucesivas:

- a) La Ordenación del pago, que es el acto que tiene por objeto adecuar el ritmo del cumplimiento de las obligaciones de la Comunidad a las prescripciones del Plan de Disposición de Fondos, de acuerdo con las disponibilidades líquidas de la Tesorería en cada momento.
- b) La realización del Pago, que es el acto por el cual se produce la salida material o virtual de fondos de la Tesorería.

2. Las fases referidas en el apartado anterior podrán ser acumuladas y emitidas en un sólo acto y documento.⁽²¹⁷⁾

3. Las funciones anteriores serán ejercidas bajo la superior autoridad del Consejero de Hacienda o por el Tesorero General de la Comunidad de Madrid.

4. Por Orden del Consejero de Hacienda podrá autorizarse el ejercicio delegado de las funciones propias de la Tesorería General.

5. En el ámbito de aplicación del presente artículo, quedan incluidos los Organismos Autónomos sin Tesorería propia y los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley cuya normativa específica confiera carácter

⁽²¹²⁾ Este apartado se desarrolla en la Resolución de 9 de enero de 2004, del Director General de Política Financiera y Tesorería, por la que se aprueban los modelos de impresos normalizados a incorporar a la aplicación informática Caja de Depósitos, y se dictan instrucciones para el supuesto de constitución de garantía definitiva contemplado en la L.C.S.P (artículo 107).

⁽²¹³⁾ Apartado 6 del art. 109 incorporado por la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2013, c.e. B.O.C.M. 21-I-14 y 27-III-14, BOE 26-III-2014).

⁽²¹⁴⁾ Véase art. 110 de la L.G.P.

⁽²¹⁵⁾ La Orden de 18 de febrero de 2005, de la Consejera de Hacienda, regula los medios de pago en la Gestión de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-III). Véase también la Orden 1398/1991, de 8 de mayo, del Consejero de Hacienda, por la que se regulan los pagos domiciliados y la realización de pagos periódicos y repetitivos (§ II.4).

⁽²¹⁶⁾ Véase Orden 1398/91, de 8 de mayo, del Consejero de Hacienda, de domiciliación de pagos derivados de contratos de suministro continuado y autorización de pagos de carácter periódico y repetitivo (B.O.C.M. 16-V) (§ II.4).

⁽²¹⁷⁾ Apartado añadido por la Disposición Adicional Sexta, de la Ley 14/1996, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1997, por lo que se procede a la reenumeración de los apartados 2 y 3 que pasan a ser 3 y 4.

limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos y no disponga otra cosa en relación con la gestión de su tesorería.

La Tesorería de la Comunidad de Madrid podrá asimismo, previa suscripción por parte de la Consejería de Hacienda del oportuno convenio de colaboración, asumir la gestión de tesorería en relación con los Organismos Autónomos con Tesorería propia, resto de Entes no incluidos en el párrafo anterior y Empresas Públicas.

Por otra parte, en los supuestos de nueva creación de cualquiera de los organismos o entidades citados en el presente párrafo, y previa solicitud, la Tesorería de la Comunidad de Madrid podrá asumir la gestión de tesorería de dichos organismos o entidades con carácter transitorio durante el proceso de su constitución y puesta en marcha, y hasta la efectiva asunción de dichas funciones por parte de los mismos.

En todos los supuestos anteriores, la gestión que en cada caso realice la Tesorería de la Comunidad se ejercerá con arreglo al principio de unidad de caja.

Asimismo, todos los organismos o entidades referidas en el presente artículo cuya gestión efectiva de tesorería se realice por la Tesorería de la Comunidad de Madrid, quedarán dispensadas de la constitución de depósitos y garantías ante la misma, ya sea a favor de la propia Comunidad de Madrid, o de forma recíproca entre ellas.⁽²¹⁸⁾

Artículo 112.

La Tesorería elaborará anualmente un presupuesto monetario que evalúe el vencimiento de las obligaciones y derechos, con el fin de realizar la mejor gestión del Tesoro. De dicho presupuesto se dará cuenta a la Asamblea de Madrid.

TÍTULO VI DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 113.⁽²¹⁹⁾

La Administración de la Comunidad, sus Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta Ley.⁽²²⁰⁾

⁽²¹⁸⁾ Nueva redacción dada a este apartado por el artículo 9 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004).

⁽²¹⁹⁾ Respecto de la contabilidad pública, véase la regulación en nota al artículo 114. La regulación de la contabilidad de las empresas está en el R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y criterios contables específicos para microempresas.

⁽²²⁰⁾ La Orden 1703/1990, de 18 de julio, de la Consejería de Hacienda, aprueba la instrucción de contabilidad sobre información a rendir por los Organismos Autónomos (B.O.C.M. 26-VII-1990) y la Orden de 21 de abril de 2010 regula la información a remitir por Organismos, Entidades y resto de Entes Públicos de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 27-V-2010).

Artículo 114.⁽²²¹⁾

1. La sujeción al régimen de la contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la Asamblea de Madrid y al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior es de aplicación al empleo de las transferencias corrientes o de capital concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, independientemente de quienes sean los perceptores de las mismas.

Artículo 115.⁽²²²⁾

Compete a la Consejería de Hacienda la organización de la contabilidad pública al servicio de los siguientes fines:

- a) Registrar la ejecución de los Presupuestos de la Comunidad en sus distintas modalidades.
- b) Conocer el movimiento y la situación de la Tesorería.
- c) Reflejar las variaciones, composición y situación del Patrimonio de la Comunidad.
- d) Proporcionar los datos necesarios para la información y rendición de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, así como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas o a la Asamblea de Madrid.
- e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público de la Comunidad y su posterior consolidación con las del resto del sector público.
- f) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.
- g) Desarrollar e implantar sistemas integrados de información de la gestión económico-financiera de la Comunidad.
- h) Cualquier otro que se establezca en las disposiciones vigentes.

Artículo 116.^{(223) (224)}

La Intervención General de la Comunidad es el centro directivo de la contabilidad pública al que compete:

⁽²²¹⁾ Véase Orden de 22 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 18-VI-2015). Las referencias hechas por la legislación de la Comunidad de Madrid al Tribunal de Cuentas se entenderá realizadas a la Cámara de Cuentas (D.A. 3ª, § V.1). Véase también art. 119.3 de la L.G.P.

⁽²²²⁾ Véase art. 124 de la L.G.P.

⁽²²³⁾ Véase art. 125.1 de la L.G.P.

⁽²²⁴⁾ Véase artículo 44 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

- a) Someter a la decisión del Consejero de Hacienda el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad.⁽²²⁵⁾
- b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública.
- c) Aprobar los planes parciales, especiales o sectoriales de contabilidad pública que se elaboren conforme al plan general, así como los de Empresas y demás Entes Públicos de la Comunidad respecto al Plan General de Contabilidad de la empresa española.
- d) Inspeccionar la contabilidad de los Organismos, Empresas y demás Entes del sector público de la Comunidad.
- e) Dictar las Circulares e Instrucciones pertinentes para el desarrollo de lo establecido en los apartados anteriores.

Artículo 117.⁽²²⁶⁾

Como Centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General de la Comunidad de acuerdo con el sistema seguido por el Estado:

- a) Formar la Cuenta General de la Comunidad y las parciales a su cargo.
- b) Examinar, formular en su caso observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse para su enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas y aprobación por la Asamblea.
- c) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a su examen crítico.
- d) Centralizar la información deducida de la contabilidad de todos los agentes que integran el sector público de la Comunidad.
- e) Elaborar las cuentas económicas del sector público de la Comunidad.
- f) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad de todos los Servicios, Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes públicos de la Comunidad.
- g) Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen en entidades de la Comunidad sometidas al régimen de contabilidad pública.
- h) Asesorar e informar en materia contable.

⁽²²⁵⁾ La Orden de 22 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 18-VI-2015).

⁽²²⁶⁾ Véase art. 125.2 de la L.G.P.

Artículo 118.⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾

La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones que en ellos deban anotarse, sin perjuicio de que las Empresas Públicas de la Comunidad se ajusten a la legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.

Artículo 119.⁽²²⁹⁾

Serán cuentadantes en las que haya de rendirse a la Asamblea y al Tribunal de Cuentas:

- a) El personal que tenga a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los gastos, así como las demás operaciones de la Administración de la Comunidad.
- b) Los presidentes, directores o gerentes de los Organismos Autónomos, Órganos de gestión sin personalidad jurídica, Empresas y demás Entes que integran el sector público de la Comunidad.
- c) Los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores de la Comunidad, sin perjuicio de que sean intervenidas las respectivas operaciones.
- d) Los perceptores de las transferencias corrientes o de capital concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Artículo 120.⁽²³⁰⁾

Las cuentas y documentación que deban rendirse se formarán y cerrarán por períodos trimestrales, excepto las correspondientes a los Organismos Autónomos, Empresas y Entes Públicos, que lo serán anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico.

Artículo 121.⁽²³¹⁾

La contabilidad pública queda sometida a verificación ordinaria o extraordinaria a cargo del personal dependiente de la Intervención General de la Comunidad y del que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas.

Artículo 122. ⁽²³²⁾

1. La Consejería competente en materia de Hacienda remitirá mensualmente a la Comisión de Presupuestos,

⁽²²⁷⁾ Véase art. 138 de la L.G.P.

⁽²²⁸⁾ Véase artículo 48 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3).

⁽²²⁹⁾ Véase art. 139 de la L.G.P. Las referencias hechas por la legislación de la Comunidad de Madrid al Tribunal de Cuentas se entenderá realizadas a la Cámara de Cuentas (D.A. 3ª, § V.1).

⁽²³⁰⁾ Véase art. 168 de la L.G.P.

⁽²³¹⁾ Véase art. 139.2 de la L.G.P.

⁽²³²⁾ Redacción dada al artículo 122 por Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 31-XII-2015, c.e. 12-IV-2016).

Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, información sobre la ejecución presupuestaria consistente en el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos. En cuanto a los gastos, dicho estado deberá comprender necesariamente denominación del centro, programas y subconceptos que lo integran así como las modificaciones que mensualmente se produzcan con indicación expresa de los créditos iniciales e incorporados, gastos autorizados, gastos dispuestos, obligaciones reconocidas, obligaciones realizadas, saldo de presupuesto, saldo de autorizaciones y saldo de disposiciones. En cuanto a los ingresos, el estado deberá comprender la ejecución acumulada por centros y artículos que lo integran, con indicación expresa de la previsión inicial, modificaciones, previsión actual, comprometido y reconocido.

2. Respecto de los entes del sector público, cuya normativa específica confiera carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos, se remitirá trimestralmente informe sobre la ejecución de su presupuesto de gastos a nivel de vinculación jurídica.

3. Trimestralmente se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de los compromisos de gastos adquiridos por la Administración de la Comunidad y sus Organismos Autónomos en aplicación del artículo 55 de esta Ley.

4. Asimismo, trimestralmente, se enviará a la Asamblea el balance de situación y la cuenta de resultados del trimestre de las Empresas y Entes Públicos.

5. Asimismo, la información que la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda proporciona sobre las liquidaciones del presupuesto del ejercicio vencido vendrá desagregada también a nivel de subconcepto.

CAPÍTULO II

De la Cuenta General de la Comunidad

Artículo 123.⁽²³³⁾⁽²³⁴⁾

1. La Cuenta General de la Comunidad comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio, y se formará con los siguientes documentos:

- a) Cuenta de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad.⁽²³⁵⁾
- b) Cuenta de los Organismos Autónomos administrativos.
- c) Cuenta de los Organismos Autónomos mercantiles.
- d) Cuentas de los Entes del sector público de la Comunidad a que se refiere el artículo 6 cuya normativa específica confiera carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

2. Por cada uno de los sujetos siguientes se enviarán a la Cámara de Cuentas:

⁽²³³⁾ En cuanto a fiscalización, véanse los artículos del 14 al 18 de la Ley de la Cámara de Cuentas (§ V.1).

⁽²³⁴⁾ Redacción dada al artículo 123 por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

⁽²³⁵⁾ Respecto de la formación e incorporación de la cuenta de la Asamblea, véase su Reglamento (§ I.5).

- a) Las Cuentas de las sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 5.1.a).
- b) Las Cuentas de las entidades de derecho público a que se refiere el artículo 5.1.b).
- c) Las Cuentas de los demás entes del sector público de la Comunidad a que se refiere el artículo 6 no incluidos en el apartado 1.d) del presente artículo.

Las cuentas anuales de las empresas públicas y de los demás entes del sector público a los que, de conformidad con su normativa específica no se les aplique el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, deberán ir acompañadas en todo caso de informe de gestión y de auditoría.

3. Asimismo, se acompañará a la Cuenta General un estado demostrativo del movimiento y situación de los avales concedidos por la Tesorería de la Comunidad, así como cualesquiera otras cuentas o estados que se determinen reglamentariamente.

Artículo 124.⁽²³⁶⁾

1. La Cuenta de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad reflejará, además de la liquidación de los presupuestos y los resultados del ejercicio, la situación de la Tesorería y de sus anticipos, del endeudamiento de la Administración de la Comunidad y de las operaciones extrapresupuestarias.

2. Mediante Orden del Consejero de Hacienda se determinará la estructura y desarrollo de cada uno de los contenidos de la Cuenta General, señalados en el apartado anterior.

Artículo 125.

A la Cuenta de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad se unirá una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

Artículo 126.

Con las cuentas rendidas por los Organismos Autónomos y demás documentos que se deban rendir al Tribunal de Cuentas, la Intervención General elaborará estados anuales agregados que permitan ofrecer una visión general de la gestión realizada en cada ejercicio por el conjunto de aquéllos.

Artículo 127.⁽²³⁷⁾

1. La Cuenta General de la Comunidad de cada año se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del treinta y uno de octubre del siguiente.⁽²³⁸⁾

⁽²³⁶⁾ Véase art. 130 de la L.G.P. en cuanto al contenido de la Cuenta General del Estado, y la Orden 1703/90, de 18 de julio, del Consejero de Hacienda, por la que se dictan instrucciones sobre información contable a rendir por los organismos autónomos. (B.O.C.M. 26-VII-1990).

⁽²³⁷⁾ Véanse arts. 131 a 132 de la L.G.P.

⁽²³⁸⁾ Téngase en cuenta el artículo 14 de la Ley de Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (§ V.1), que fija como fecha el 31 de julio.

2. La falta de rendición de cuentas de alguno o algunos de los Organismos Autónomos a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 123, o su rendición con graves defectos, no constituirá obstáculo para que la Intervención General pueda formar la Cuenta General y el Tribunal de Cuentas rendir la declaración definitiva que le merezca, siempre que tales omisiones o defectos no impidan la elaboración de los estados anuales agregados que previene el artículo 126 de la presente Ley, todo ello sin perjuicio en su caso, de la apertura de los procedimientos que resultasen procedentes.

3. Las Cuentas a que se refiere el apartado 2 del artículo 123 de la presente Ley se remitirán al Tribunal de Cuentas por las propias Sociedades mercantiles, Entidades de Derecho Público y demás Entes del sector público de la Comunidad, dentro de los seis meses siguientes a la fecha que termine su ejercicio social.

Artículo 128.⁽²³⁹⁾

1. Con carácter previo a su envío a la Cámara de Cuentas, el Consejo de Gobierno acordará su conformidad respecto de la idoneidad formal de cada una de las Cuentas a que se refiere el artículo 123 de esta Ley, previo en correspondiente informe de la Intervención General.

2. La Asamblea de Madrid entenderá de la propuesta que contenga el informe derivado del análisis de la Cuenta que le sea remitido por la Cámara de Cuentas y dictará, en su caso, las disposiciones necesarias para su aplicación.

TÍTULO VII DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 129.⁽²⁴⁰⁾

Las autoridades y todo el personal al servicio de la Comunidad de Madrid que por dolo, culpa o negligencia grave adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley y normas que la desarrollen o complementen, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.

Artículo 130.⁽²⁴¹⁾

1. Constituyen infracciones, según determina el artículo inmediato anterior:

- a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Comunidad.

⁽²³⁹⁾ Nueva redacción dada a este artículo por el artículo 9 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004).

⁽²⁴⁰⁾ Véase art. 176 de la L.G.P., art. 20 de esta Ley, art. 13 de la Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (§ V.1) y art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. 02-X-2015).

⁽²⁴¹⁾ Véase art. 177 de la L.G.P.

- b) Administrar los recursos de la Hacienda de la Comunidad sin sujetarse a las disposiciones que regulan su reconocimiento y recaudación en la Tesorería.
- c) Comprometer gastos y reconocer obligaciones sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la de Presupuestos que sea aplicable.
- d) Dar lugar a pagos indebidos al reconocer las obligaciones o al expedir documentos en virtud de funciones encomendadas.
- e) No rendir las cuentas reglamentarias exigidas o presentarlas con graves defectos.
- f) No justificar la inversión de los fondos a que se refieren los artículos 74 y 75 de esta Ley.
- g) Cualquier otro acto o resolución con infracción de la presente Ley.

2. Las infracciones tipificadas en el apartado anterior darán lugar, en su caso, a la obligación de indemnizar establecida en el artículo 129 de esta Ley y a la responsabilidad penal o disciplinaria correspondiente.

Artículo 131.⁽²⁴²⁾

1. Están sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Comunidad, además de las autoridades y personal que adopten la resolución o realicen el acto determinante de aquélla, los interventores y ordenadores de pagos con dolo, culpa, negligencia o ignorancia inexcusable, que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia del acto o resolución.

2. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.

Artículo 132.⁽²⁴³⁾

1. En los supuestos que describen las letras b) a g) del apartado 1 del artículo 130 de esta Ley, y sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el apartado 1 del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1982, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.⁽²⁴⁴⁾

2. El acuerdo de incoación, el nombramiento de Juez instructor y la resolución del expediente corresponderán al Consejo de Gobierno cuando se trate de personas que, de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la condición de autoridad, y al Consejero de Hacienda en los demás casos.

3. La resolución que, previo informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, ponga fin al expediente tramitado con audiencia de los interesados, se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda de la Comunidad, imponiendo a los responsables la obligación de indemnizar en la cuantía y en el plazo que se determine.

⁽²⁴²⁾ Véase art. 178 de la L.G.P.

⁽²⁴³⁾ Véase art. 180 de la L.G.P.

⁽²⁴⁴⁾ Véase artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. 2-X-2015).

Artículo 133.⁽²⁴⁵⁾

1. Los perjuicios declarados en los expedientes, a que se refiere el artículo 132 de esta Ley, tendrán la consideración de derecho de la Hacienda de la Comunidad, gozarán del régimen a que se refiere el artículo 28 de la misma y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.

2. La Hacienda de la Comunidad tiene derecho al interés previsto en el artículo 32, apartado 3, de esta Ley, sobre el importe de los alcances en malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios. Cuando por insolvencia del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará a contar del día en que se les requiera el pago.

Artículo 134.⁽²⁴⁶⁾

Tan pronto como se tenga noticia de un alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda de la Comunidad o hayan transcurrido los plazos señalados en el artículo 74 de la presente Ley sin haber sido justificadas las órdenes de pagos a que el mismo se refiere, los Jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pagos, respectivamente, instruirán las diligencias previas y adoptarán con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda de la Comunidad, dando inmediato conocimiento al Tribunal de Cuentas o al Consejero de Hacienda, en cada caso, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera⁽²⁴⁷⁾

1. La Asamblea de Madrid, sin perjuicio de sus peculiaridades como consecuencia de su autonomía organizativa y financiera y de lo que disponga su normativa específica, se adaptará al régimen económico-financiero regulado en la presente Ley.

2. Las dotaciones presupuestarias de la Asamblea se librarán en firme a nombre de la misma y semestralmente, de forma que el primer libramiento se realizará en la primera semana del ejercicio presupuestario y el segundo antes de la primera semana del segundo semestre.

⁽²⁴⁵⁾ Véase art. 181 de la L.G.P.

⁽²⁴⁶⁾ Véase art. 182 de la L.G.P. Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (§ V.1).

⁽²⁴⁷⁾ El régimen presupuestario de la Asamblea está regulado en los artículos 89 y siguientes del Reglamento de la Asamblea (§ I.5) y en el Título IV del Reglamento de régimen interior de la Asamblea de Madrid, aprobado por *Acuerdo de 3 de diciembre de 2001, de la Mesa de la Asamblea, por el que se aprueba la reforma global del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid (BOAM núm. 126, de 4 de diciembre de 2001. BOCM 23 de enero de 2002.)*. Modificado por:

- *Acuerdo de 10 de julio de 2002, de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid (BOAM nº 166, de 12 de julio de 2002).*
- *Acuerdo de 10 de septiembre de 2007, de la Mesa de la Asamblea (BOAM nº 16, de 14 de septiembre de 2007).*
- *Acuerdo de 10 de octubre de 2011, de la Mesa de la Asamblea (BOAM nº 18, de 13 de octubre de 2011).*
- *Acuerdo de 11 de noviembre de 2014, de la Mesa de la Asamblea (BOAM nº 212, de 17 de noviembre de 2014).*
- *Acuerdo de 3 de abril de 2017, de la Mesa de la Asamblea (BOAM nº 113, de 6 de abril de 2017).*
- *Acuerdo de 16 de abril de 2018, de la Mesa de la Asamblea (BOAM nº 174, de 19 de abril de 2018).*
- *Acuerdo de 16 de mayo de 2018, de la Mesa de la Asamblea (BOAM nº 180, de 18 de mayo de 2018).*

3. Los acuerdos que adopte la Mesa de la Asamblea en relación a las transferencias de crédito y a la distribución de las incorporaciones de los remanentes de crédito del Presupuesto de la Cámara serán comunicados a la Consejería de Hacienda para su formalización.

4. La Asamblea, sin perjuicio del principio de unidad de caja, contará con Tesorería propia a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Los ingresos derivados de la actividad de la Cámara quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones de la sección "Asamblea".

5. La Cuenta de la Asamblea se formará por los servicios administrativos de la Cámara y se unirá a la Cuenta General de la Comunidad.

Segunda⁽²⁴⁸⁾

El artículo 1.3 de la Ley 7/1986, de 23 de julio, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid, quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1.3. Los bienes integrantes del patrimonio se regirán por la legislación básica del Estado, por la presente Ley, la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por los Reglamentos que la desarrollen y, subsidiariamente, por las normas de Derecho Público autonómico o estatal y por las de Derecho Privado civil o mercantil".

Tercera

Se modifica el artículo 11 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid cuya redacción será la siguiente:

"El Consejo de Administración podrá delegar en uno de sus miembros o en el Gerente las competencias señaladas en los párrafos d), f), i), k), l), m), s), o) y p) del apartado 1 del artículo anterior. Respecto a la delegación de competencias señaladas en el párrafo o), se estará a lo establecido en la Ley o Decreto correspondiente".⁽²⁴⁹⁾

Cuarta

Se autoriza al Consejero de Hacienda, a organizar todas las Unidades que realicen cualesquiera de las funciones de gestión económico-financiera a que se refiere la presente Ley, en aras de una mayor coordinación y eficacia de la Administración financiera.

Quinta

Como consecuencia de la aplicación del artículo 111, apartado 1 letra a), de la presente Ley, la documentación justificativa del gasto realizado podrá quedar en aquellos Centros en los que se reconocieron las correspondientes obligaciones, y previo cumplimiento del artículo 73, para su remisión al Tribunal de Cuentas.⁽²⁵⁰⁾

⁽²⁴⁸⁾ Derogada por la vigente Ley 3/2001, de 21 de junio, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 3-VII-2001).

⁽²⁴⁹⁾ La referencia a la letra s) es una errata por cuanto no existe en el artículo 10.1, al que se remite el artículo 11.

⁽²⁵⁰⁾ D.A. 3ª de la Ley 4/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (§ V.1).

La Tesorería podrá recibir las propuestas y librar las correspondientes órdenes de pago por medios informáticos agrupadas a través de relaciones, que sustituyan a la documentación individual.

La realización de los flujos de tesorería a través de las entidades financieras podrá ejecutarse por medios telemáticos, correspondiendo a la Consejería de Hacienda dictar las instrucciones reguladoras oportunas. En este supuesto, la documentación soporte escrita quedará custodiada, en la Tesorería General.⁽²⁵¹⁾

Sexta

Los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad de Madrid gozarán de autonomía en su gestión económica en términos análogos a los previstos en la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre la autonomía de gestión económica de los Centros docentes públicos no universitarios.⁽²⁵²⁾

Séptima

Para la ejecución del Plan anual de auditorías previsto en esta Ley, se podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditorías que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine la Intervención General de la Comunidad.⁽²⁵³⁾

⁽²⁵¹⁾ Párrafo añadido por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/1996, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1997.

⁽²⁵²⁾ Véase el desarrollo en el Decreto 149/2000, de 22 de junio, que regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión de los centros públicos no universitarios (§ II.1).

⁽²⁵³⁾ Véase el artículo 37 del Decreto 45/1997 que desarrolla el régimen de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid (§ V.3). La Disposición Adic. Decimoquinta de la Ley 2/1992, de 30 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1992 -que debemos entender vigente-, dispone lo siguiente:

"Para la realización del Plan anual de auditorías de 1992 y sucesivos, por el Consejo de Gobierno se establecerá, el procedimiento y las bases reguladoras de la contratación con las empresas auditoras con el objeto de atender coordinadamente y de una manera eficiente tanto las finalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas en su caso, como en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en los siguientes supuestos:

- a) *Las empresas públicas que en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas tuvieran contratos vigentes con empresas auditoras, se adecuarán al marco instrumental aprobado por el Consejo de Gobierno, a partir de la finalización de dichos contratos. Transitoriamente, se coordinarán con la Intervención General para la realización complementaria de los trabajos necesarios, adecuando su contratación a estos extremos.*
- b) *Por las empresas y entes públicos, no sujetos al régimen obligatorio de auditoría establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se procederá en la misma forma que se dispone en el apartado anterior, si tuvieran contrataciones similares en vigor.*
- c) *Cuando no fuere posible, en cualquiera de los supuestos anteriores, la adecuación contractual que se determina, la Consejería de Hacienda, a propuesta de la Intervención General, recabará la colaboración de empresas auditoras con carácter temporal, financiándose por la empresa o ente público sujeto a auditoría los gastos derivados de tal colaboración".*

Octava⁽²⁵⁴⁾

Se crea, dentro del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid del Grupo A, la Escala de Técnicos de Finanzas, con las siguientes características:

- a) Titulación universitaria superior.
- b) Las funciones que se asignen a las plazas que lo integren serán todas aquellas de nivel superior en el ámbito patrimonial económico-financiero y tributario.

Novena⁽²⁵⁵⁾

1. La Cámara de Cuentas, sin perjuicio de sus peculiaridades como consecuencia de su autonomía organizativa y financiera y de lo que disponga su normativa específica, se adaptará al régimen económico-financiero regulado en la presente Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

2. Las dotaciones presupuestarias de la Cámara de Cuentas se librarán en firme a nombre de la misma y semestralmente, de forma que el primer libramiento se realizará en la primera semana del ejercicio presupuestario y el segundo antes de la primera semana del segundo semestre.

⁽²⁵⁴⁾ DECRETO 26/1994, de 3 de marzo, por el que se desarrollan las funciones atribuidas a la Escala de Técnicos de Finanzas.

La Disposición Adicional Octava de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, crea, dentro del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, la Escala de Técnicos de Finanzas, estableciendo en su letra b) que las funciones que se asignen a las plazas que integren la referida Escala serán todas aquellas de nivel superior en el ámbito patrimonial económico-financiero y tributario.

El Presente Decreto tiene por objeto desarrollar el contenido de las funciones previstas con carácter general por la citada Ley.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,

DISPONGO

Artículo único

A los efectos de lo dispuesto por la Disposición Adicional Octava de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, constituyen funciones de nivel superior en el ámbito patrimonial, económico-financiero y tributario las siguientes:

- a) La función interventora, con el contenido, finalidad y extensión previsto en el Título III de la Ley Reguladora de la Hacienda Pública.
- b) El Control financiero de la Administración de la Comunidad, con sus Organismos Autónomos, Empresas y Entes Públicos, con el alcance y en los términos previstos en los artículos 17, 18, 85 y 89 de la citada Ley.
- c) La Dirección y gestión de la contabilidad pública con el alcance y al servicio de los fines establecidos en el Título VI de la referida Ley.
- d) Las de gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios o cedidos, así como la revisión de los actos que en virtud de la normativa vigente sean de la competencia de los órganos que tienen encomendada la gestión tributaria.
- e) La investigación, y comprobación de los tributos propios o cedidos y demás ingresos públicos, así como la práctica de las liquidaciones a que dichas funciones den lugar y la obtención de información con trascendencia para la aplicación de los tributos. (*)
- f) El establecimiento de técnicas presupuestarias; evaluación y determinación de escenarios presupuestarios, análisis de políticas de ingreso y gasto público así como la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
- g) La coordinación y asesoramiento de Oficinas Presupuestarias o unidades asimiladas que como centro directivo corresponde a la Consejería de Hacienda.
- h) Las funciones de Ordenación de Pagos, ingresos y de Tesorería General, así como las de gestión recaudatoria en vía de apremio.
- i) La administración y gestión del endeudamiento, operaciones de crédito y avales y su relación con entidades financieras.
- j) Las actuaciones de inspección y tutela que, siendo competencia de la Comunidad de Madrid, corresponda sobre las Cajas de Ahorro y demás instituciones de crédito corporativo o en su caso de corporaciones locales.
- k) La gestión de sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas.
- l) La investigación y asesoramiento de las funciones y materias referidas a los apartados anteriores.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(*) Respecto a las funciones descritas en las letras d) y f) téngase en cuenta el artículo 6 de la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, cuyo apartado tres atribuye estas funciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

⁽²⁵⁵⁾ Redacción dada a esta Disposición Adicional Novena por el artículo 9 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 30-XII-2004, c.e. 2-II-2005).

Décima

Por el Consejo de Gobierno y el Consejero de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, se desarrollará reglamentariamente el contenido de la presente Ley.

Undécima

Revisión de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional llevará a cabo una revisión general de toda la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, así como del resto de órganos administrativos colegiados adscritos a la misma, al objeto de comprobar la pertinencia de cada uno de ellos, así como su eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus competencias. Asimismo dicha revisión deberá contener un análisis de las posibles vías de colaboración con otros organismos públicos, en especial de la Administración General del Estado, que permita una gestión más eficaz y eficiente de la Administración y evite duplicidades.⁽²⁵⁶⁾

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera ⁽²⁵⁷⁾

⁽²⁵⁶⁾ Disposición adicional introducida por el artículo 1 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

⁽²⁵⁷⁾ Decreto 38/1991, de 24 de mayo, por el que se regula la integración de funcionarios en la Escala de Técnicos de Finanzas de la Comunidad de Madrid.

La Disposición Adicional octava de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, crea dentro del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General grupo A, la Escala de Técnicos de Finanzas. Por su parte, la Disposición Transitoria primera del mismo texto legal establece los requisitos para la integración de los funcionarios en la precitada Escala, facultando al Consejo de Gobierno para que, mediante Decreto, proceda a la mencionada integración.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,

DISPONGO

Artículo 1. Requisitos.

Se integrarán en la Escala de Técnicos de Finanzas los funcionarios de carrera integrados en la Administración de la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos a la fecha de 21 de noviembre de 1990:

- a) *Estar en posesión de titulación universitaria superior.*
- b) *Encontrarse prestando servicios en la Comunidad de Madrid en las situaciones administrativas de servicio activo, servicios especiales o excedencia para el cuidado de hijos.*
- c) *Haber desempeñado en la Comunidad de Madrid, como funcionario de carrera y durante al menos un año ininterrumpidamente, puestos de trabajo con categoría no inferior a Jefatura de Servicio o asimilado, cuyo contenido y funciones sean sustancialmente de carácter patrimonial, económico-financiero y tributario, de nivel superior, y cuyo cometido consista esencialmente en tareas de gestión, inspección, asesoramiento, control o ejecución de dichas materias.*

Artículo 2. Procedimiento.

1. Iniciación.

- a) *El procedimiento para la integración se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del interesado, según modelo que figura como Anexo a este Decreto, a la que deberán acompañarse preceptivamente los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º que en lo que se refiere al desempeño de puestos de trabajo y funciones, deberán consistir necesariamente en certificaciones expedidas por la Secretaría General Técnica respectiva.*
- b) *El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días contados a partir de la publicación del presente Decreto.*

2. Tramitación.

La Dirección General de la Función Pública expedirá las correspondientes certificaciones, con los datos que sobre los puestos de trabajo desempeñados por los interesados figuren inscritos en el Registro de Personal, y podrá solicitar, si lo considera necesario, las aclaraciones o aportación de documentación complementaria que estime oportuno.

3. Resolución.

La Dirección General de la Función Pública propondrá al Consejero de Hacienda la relación de funcionarios a los que de acuerdo con lo establecido en este Decreto, corresponde integrar la Escala de Técnicos de Finanzas.

1. Quedarán integrados en la Escala de Técnicos de Finanzas a que se refiere la Disposición Adicional octava, aquellos funcionarios de carrera que, previa solicitud, cumplan los siguientes requisitos a la entrada en vigor de la presente Ley:

- a) Estar en posesión de titulación universitaria superior.
- b) Encontrarse prestando servicios en la Comunidad de Madrid.
- c) Haber ejercido cualesquiera de las funciones a que se refiere la letra b) de la Disposición Adicional octava de la presente Ley, a través de puestos de trabajo con categoría no inferior a Jefatura de Servicio, o asimilado en la Comunidad de Madrid, al menos durante un año ininterrumpidamente como funcionario de carrera.

2. En el plazo de tres meses desde la publicación de la presente Ley, el Consejo de Gobierno dictará los correspondientes decretos de integración individualizada a que se refiere el apartado anterior con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley. Por el Consejero de Hacienda se instrumentalizará el proceso de integración.⁽²⁵⁸⁾

Segunda

En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio de 1991, se incluirá en el Plan anual de auditorías, a que se refiere el apartado 3 del artículo 17 de la presente Ley, todas las Empresas y Entes Públicos de la Comunidad de Madrid.⁽²⁵⁹⁾

Tercera

Los derechos y obligaciones de contenido económico de la Comunidad de Madrid nacidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sujetos a la legislación actual.

Artículo 3. Eficacia.

Los efectos de la integración que se regula en el presente Decreto, se retrotraerán a la fecha del 21 de noviembre de 1990.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aquellos funcionarios que ya hubieran solicitado la integración que se regula en el presente Decreto con anterioridad a su publicación, deberán adecuar sus solicitudes a lo establecido en el artículo 2º de este texto, dentro del plazo establecido en dicho artículo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Se faculta al Consejero de Hacienda para que dicte las órdenes que sean necesarias para el desarrollo de este Decreto, y para la integración individualizada de los funcionarios correspondientes en la Escala de Técnicos de Finanzas.

Segunda

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid."

⁽²⁵⁸⁾ Véase Decreto 38/1991, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la integración de funcionarios en la Escala de Técnicos de Finanzas de la Comunidad de Madrid, la Orden 2001/1994, de 8 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se vinculan determinados puestos a la Escala de Técnicos de Finanzas (B.O.C.M. 23-XI), Orden 2603/1994, de 20 de diciembre, por la que se integra a determinados funcionarios en la Escala de Técnicos de Finanzas de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 30-XII), y Orden 1650/95, de 16 de agosto, por la que se vinculan determinados puestos de trabajo al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Administración General y a la escala de Técnicos de Finanzas con carácter indistinto (B.O.C.M. 6-IX).

⁽²⁵⁹⁾ Véase Nota a la Disposición Adicional Séptima de la presente Ley.



DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, siendo también publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El régimen establecido en las disposiciones que a continuación se especifican de la Ley 4/1990, de 4 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1990, será de plena aplicación hasta la entrada en vigor de la siguiente Ley de Presupuestos: Capítulo Segundo (Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios) del Título I; artículo 25 (Operaciones financieras a medio y largo plazo); artículo 26 (Operaciones financieras a corto plazo); artículo 28 (Tesorería); artículo 29 (Avales); artículo 35 (Ordenación de gastos); artículo 36 (Información de la gestión presupuestaria), y artículo 37 (Límite de aportación pública de capital a sociedades anónimas).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley, y expresamente el capítulo VI del Título IV de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la guarden y la hagan guardar.